

DICIEMBRE 5 DE 1934

66° REUNION — 8° SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES ANTENOR R. FERREIRA, ROBERTO J. NOBLE  
Y RODOLFO COROMINAS SEGURA

MINISTRO PRESENTE: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Santos, Aguirrezabala Miguel A., Ahumada Luis Alberto, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel, Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Arca José, Arnoldi Adolfo, Arrieta Hermínio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Cafferata Juan F., Candia Cornelio, Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Carús Agustín J., Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Contto José A., Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicanor, Courel Carlos D., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Diekmann Adolfo, Diekmann Enrique, Escalera Pacundo, Escobar Adrián O., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, García Gorostinga Raúl, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Godfrid Juan, Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Maseda Manuel, González Valentín, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jardel Enrique O., Korn Guillermo, Lamesa Juan B., López Héctor S., Magris Amleto, Mancini Rafael, Marcó Cipriano F., Martínez José Heriberto, Mattos Luis Martín, Molina Serapio, Moret Carlos (h.), Mouchet Enrique, Mouesca Eduardo, Movsiehoff Bernardo, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parera Gregorio, Parodi Misael J., Penn José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pflieger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pressacco Juan P., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Ramiconi Luis, Ramírez Manuel (h.), Repetto Agustín, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Rozas José E., Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel O., Spinetto Alfredo L., Taborda Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Wade Eugenio, Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Acosta Guillermo, Aráoz José Ignacio, Becerra Eugenio A. (h.), Bosano Ansaldo Daniel, Calderón Osvaldo M., Dogano Alfredo P., Fresco Manuel A., Garayalde José María, Herrera Bruno J., Lencinas Rafael Néstor, Lima Vicenta Solano, Rojas Marcos E., Salas José Raquel, Saravia José M.; CON AVISO: Pomponio Vicente E.; SIN AVISO: Aráoz Eudoro D., Crito Miguel, Dávila Miguel V., Manacorda Carlos, Morrough Bernard Juan P., Ocampo Enrique, Ruiz Guíñazú Jacinto, Vallejo Luis A., Vignart Uberto F.

## SUMARIO

- 1.—Manifestaciones de la Presidencia.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo contestando el pedido de informes relativos a la construcción de la línea férrea de La Paz a Feliciano (Entre Ríos).

II.—Peticiones particulares.

III.—Proyecto de ley del señor diputado Mancini sobre contribución para la erección de un monumento al general San Martín en San Jorge (Santa Fe).

4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones al señor diputado Salas.

5.—Termina la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre unificación de impuestos internos. Se aplaza la consideración de la parte relativa a prórroga y distribución del impuesto a los réditos e impuesto a las ventas.

6.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.

7.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre creación de la Junta Reguladora de Vinos.

—En Buenos Aires, a cinco de Diciembre de 1934, siendo la hora 15 y 30:

## 1

MANIFESTACIONES DE LA  
PRESIDENCIA

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Queda abierta la sesión con la presencia de 95 señores diputados en el recinto.

Señores diputados: No podría permanecer insensible al alto honor que me ha discernido la Honorable Cámara en el día de ayer al ratificarme su confianza, ni tampoco me sería excusado agradecerlo sin exteriorizar el estado de ánimo con que lo recibo.

Refirmo, pues, desde esta alta tribuna, mi propósito invariado de seguir presidiendo las deliberaciones del cuerpo con la ecuanimidad, el equilibrio y la fortaleza de espíritu necesarias para asegurar el normal desarrollo de sus tareas constitucionales, sin que sea parte para desviarme de esta línea de conducta cualquiera actitud que, en cumplimiento de deberes indeclinables, deba asumir o haya asumido en el recinto desde mi banca de legislador.

Para hacer efectivos estos propósitos de beneficio común, reclamo y espero la colaboración de todos los señores diputados, sin distinción de personas y cualquiera sea el color político del sector a que pertenezcan.

Nada más. (*Muy bien! Aplausos*).

## 2

## ACTA

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Guglielmelli, se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

## 3

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

—Ocupa su banca en el recinto el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

## I

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1934.

*A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad y en contestación al pedido formulado en la resolución sancionada en la sesión de fecha 9 de Agosto último, relacionada con la construcción de la línea de La Paz a Feliciano, le es grato llevar a su conocimiento que por decreto en acuerdo de ministros, número 52.490, de 30 de Noviembre próximo pasado, que en copia se acompaña, se ha aprobado el contrato celebrado por la Administración de los Ferrocarriles del Estado y la firma Hume Hermanos, para la prosecución de dichas obras, las cuales se llevarán a cabo a la mayor brevedad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.  
*Manuel R. Alvarado.*

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Queda a disposición de los señores diputados.

## II

## Peticiones particulares

## SOLICITUDES DE SUBSIDIO:

Congregación Argentina de Hermanas Terceras. Dominicas del Santísimo Rosario; Presidente de la Cruz Roja Argentina (Comité Rosario); Sociedad Femenil Italiana de Beneficencia de La Plata.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

## III

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Acuérdase a la Comisión pro monumento al general San Martín, de San Jorge, departamento de San Martín, provincia

de Santa Fe, la suma de diez mil pesos moneda nacional (\$ 10.000 m/n.), como contribución de la Nación para que se levante un monumento al general don José de San Martín en dicha localidad.

Art. 2º — Este gasto se hará de rentas generales, con imputación a la presente ley.

Art. 3º — Comuníquese, etc.

*Rafael Mancini.*

Señor presidente:

El pueblo argentino tiene la obligación de demostrar en forma material, palpable, que no olvida a la gloria más pura de nuestra independencia, que desea conservar eternamente el ejemplo — harto olvidado en estos días — de cómo puede unirse al talento militar y al éxito guerrero, la más severa austeridad civil y el más grande de los renunciamentos: el renunciamento del poder.

Abundar en tales consideraciones sería superfluo. Nuestro pueblo debe pagar, a la vez, la deuda de gratitud contraída con quien aseguró su independencia y la lección de rígida virtud ciudadana que le impartiera. Libertad y dignidad: he ahí los dones máximos de las sociedades políticas que los argentinos hemos recibido de José de San Martín.

¿Cómo saldar, siquiera en parte, tan inmensa deuda?

Algo se ha hecho ya en los últimos tiempos. Y para contribuir en la medida de mis fuerzas para que en ningún lugar del país deje de perpetuarse la memoria del libertador, pido a mis colegas me acompañen en la sanción de este proyecto que llevará a un importante centro de la provincia de Santa Fe el bronce recordatorio.

Los vecinos del distrito de San Jorge, departamento de San Martín, reunidos el 11 de Noviembre de 1928, constituyeron una comisión especial pro monumento al general San Martín, encargada de recolectar fondos para la erección de un monumento al mismo. Para cumplir dicha finalidad se ha venido realizando un esfuerzo noble y ejemplar, pero dada la situación económica por que atravesamos, no ha sido posible completar la suma necesaria y actualmente se halla amenazada de postergación tan patriótica iniciativa, hasta tanto los dignos vecinos no logren reunir la exigua cantidad de 10.000 pesos.

Estas son las razones que me mueven a

solicitar la contribución del gobierno nacional para dar cima a ese afán. Demos, señores diputados, a la región donde trabajan hombres de todos los países de la tierra, la posibilidad de que se fundan sus razas con el metal de un monumento elevado al prócer excelso de nuestra nacionalidad.

*Rafael Mancini.*

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

4

## LICENCIA

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1934.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Antenor R. Ferreira.*

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente y, por su intermedio, a la Honorable Cámara, para solicitarle licencia para faltar a las sesiones a realizarse hasta el 18 del corriente, por tener que ausentarme a Tucumán en donde reclama mi presencia el partido político a que pertenezco, con motivo de los próximos comicios.

Dios guarde al señor presidente,

*José R. Salas.*

—Sin observación, se vota y concede, con goce de dieta, la licencia solicitada

5

## UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Corresponde pasar a la orden del día.

Ha quedado pendiente de consideración el dictamen de la comisión especial respecto al artículo 25 del despacho, de que se va a dar lectura por Secretaría.

—Se lee:

Los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935 que hubieran satisfecho o satisficieran

posteriormente gravámenes provinciales, pagarán la diferencia hasta completar el monto de 2 centavos, debiendo debitarse a las provincias la suma que cobraran después del 1º de Enero.

El Banco de la Nación dividirá el total debitado en tantas cuotas diarias iguales como las que correspondan a un periodo de 12 meses y las irá restando de lo que deba acreditar a la respectiva provincia a partir de la fecha de su adhesión, entregando su importe al gobierno nacional.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Está en consideración el dictamen de la comisión.

**Sr. Bogliolo.** — Pido la palabra.

Vamos a proponer dos modificaciones al artículo en debate. La primera consiste en lo siguiente: «El impuesto interno al azúcar será abonado a la salida de fábrica o aduana, aplicándose a ese efecto el artículo 16 de la ley 3.764.»

Es decir, se trata de establecer de una manera clara la forma de percepción de este impuesto. De acuerdo con la redacción del proyecto, podría el fisco percibir el importe respectivo en el momento en que los fabricantes pusieran en venta el producto; en cambio, nosotros queremos que se establezca claramente, a fin de evitar que en este año sufra el fisco nacional un nuevo quebranto en esta materia, que el impuesto correspondiente debe abonarse en el momento en que el azúcar salga de la fábrica.

De otra manera, los fabricantes, como lo hacen ahora, podrían llevar el azúcar a sus depósitos, situados en todo el país, con lo que el erario público dejaría de percibir por motivos especiales, una suma importante en el año 1935.

**Sr. Ghioldi.** — Pido la palabra.

Como todos los diputados de la Comisión de Presupuesto hemos consultado con la almohada el proyecto del señor diputado Arrieta y la redacción que dió la comisión con nuestra colaboración, cada uno trae esta tarde el producto de esa elaboración.

Yo he leído detenidamente el artículo despachado por la comisión y

llegué a las conclusiones que quiero fundar a la Cámara muy rápidamente.

El artículo contempla un propósito económico en el cual todos estamos de acuerdo, es decir, en que no se sume al impuesto provincial el impuesto nacional que ahora ha de cobrarse. No queremos, pues, agregar al existente un nuevo impuesto.

Como hasta este instante hay tres sistemas impositivos provinciales que difieren entre sí y que quedarían suprimidos para ser reemplazados por un único sistema nacional, pueden producirse en el tránsito algunas dificultades que todos advertimos.

En primer lugar, las provincias perciben el impuesto en la actualidad casi inmediatamente después de la zafra. Por otra parte, los impuestos varían en Tucumán, en Jujuy y en Salta, en una graduación, que va de más en menos desde Jujuy a Salta, en tanto que por el sistema único de la Nación se cobraría a la salida para el consumo y con una tasa única de dos centavos.

Para resolver las dificultades que se derivan de la aplicación del sistema con el gran stock existente, la comisión despachó el artículo en la forma que los señores diputados conocen. Pero a mí me parece que otra solución posible consistiría en lo siguiente: dejar que el stock actual se liquide y durante esa liquidación conceder a las provincias la más amplia autonomía impositiva, comenzando la Nación a actuar con la nueva zafra. En consecuencia, habría también que deducir lo que se les aporta a las provincias en concepto de la parte proporcional por ser provincia productora, lo que les corresponde por los artículos 6º y 7º.

Pongo a consideración de la Honorable Cámara la redacción que puede calificarse de experimental, y que es susceptible de ser modificada por la Cámara, porque ni siquiera he tenido tiempo ni oportunidad de conversar al respecto mayormente con mis compañeros a quienes sometí la redacción hace pocos minutos. Yo redactaría el artículo de la siguiente manera: «Las

provincias productoras de azúcar que adhieran a esta ley podrán aplicar sus actuales leyes impositivas sobre los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935. El impuesto nacional se percibirá sobre el azúcar elaborado después del 1º de Enero de 1935 — es decir, desde que se inicie la zafra del año próximo. Se deducirán de las cantidades acordadas a las provincias productoras, en virtud de los artículos 6º y 7º, las sumas correspondientes al promedio de las recaudaciones provinciales en el período 1929 - 1933, en concepto de impuesto a la producción de azúcar.»

Me parece que es ésta una proposición lógica.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

En realidad, señor presidente, todos los sectores de la Cámara han coincidido en contemplar la situación de hecho creada, desde que el actual stock de azúcares ha sido elaborado bajo régimen impositivo provincial. Han coincidido en el sentido de que no era lógico ni equitativo que el azúcar tuviera una superposición de impuestos: el provincial, cuando fué elaborado, y el nacional en virtud de la unificación. La pequeña dificultad estriba en traducir en una redacción adecuada el pensamiento sobre el cual coinciden todos los diputados.

La redacción propuesta por el señor diputado Bogliolo, contempla esa situación. La contempla, también, en algunos de sus párrafos, la proposición del señor diputado Ghioldi, y, como la contemplaba la redacción del señor diputado Arrieta.

El señor diputado Ghioldi — refiriéndose especialmente a la lectura que acaba de hacer — presenta su pensamiento en tres párrafos. El primero, dice que las provincias podrán seguir aplicando el régimen impositivo de sus respectivas leyes a los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935. No hay inconveniente en aceptar esa redacción, aunque innecesaria, desde que la facultad de las provincias para aplicar

sus impuestos al arrastre de existencia de azúcar, no deriva del consentimiento que dé la ley de unificación de impuestos internos, sino de sus propias leyes provinciales. Sin embargo, repito, no hay inconveniente en incorporar esa redacción.

**Sr. Ghioldi.** — Observe el señor diputado, que la Nación podría aplicar a ese azúcar el gravamen nacional.

**Sr. Simón Padrós.** — Voy a ello, señor diputado.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Sírvanse no dialogar los señores diputados. Invito al señor diputado por Tucumán a dirigirse a la Presidencia.

**Sr. Simón Padrós.** — Muy bien, señor presidente.

La imposibilidad de aplicar el impuesto nacional deriva no del primer párrafo de la redacción del señor diputado Ghioldi, sino del segundo, donde dice, si no he interpretado mal, que el impuesto interno nacional se aplicará a los azúcares que se elaboren después del 1º de Enero de 1935. De modo que la no superposición del impuesto resulta del segundo párrafo, no del primero.

En cuanto al tercer párrafo, no alcanzo a comprender exactamente su significado, porque, según la lectura que hemos escuchado, parecería un contrasentido con la ley de unificación, desde que esta ley, en virtud de los artículos 6º y 7º, autoriza la entrega de dinero por parte de la Nación a las provincias, en compensación a la renuncia de su facultad impositiva, en cuanto a la producción, tomando como promedio las recaudaciones de los años 1929 a 1933.

Creo que el señor diputado Ghioldi ha querido significar — y en esto lo acompaño — que las cantidades que las provincias perciban en virtud del primer párrafo de su proposición, o sea las cantidades que las provincias perciban después del 1º de Enero por los impuestos provinciales a la producción, sobre las existencias a dicha fecha, serán deducidas de las entregas que haga la Nación. Si éste fuera el significado...

**Sr. Ghioldi.** — Efectivamente.

**Sr. Simón Padrós.** — ... no habría inconveniente en aceptar el pensamiento, reflejándolo en una redacción adecuada, que podría ser la misma que ayer quedó aceptada, estableciendo la automaticidad de la retención por parte de la Nación.

Dejo propuesto, entonces, que se reemplace el despacho producido ayer por la comisión, por el primero y segundo párrafos de la proposición del señor diputado Ghioldi, incorporando el tercer párrafo de la redacción de ayer, en lo que se refiere a la automaticidad de la retención. En esta forma se respetan las diversas posiciones provinciales de azúcares, que habiendo sido elaboradas bajo regímenes impositivos distintos, mantendrán su posición en lo que se refiere a las existencias de elaboración 1934. Se vuelve, por consiguiente, con acierto al criterio que inspiró la redacción presentada por el señor diputado Arrieta en la sesión de ayer.

**Sr. Ghioldi.** — Pido la palabra.

Incluí el primer párrafo con este concepto: De acuerdo a la ley, ninguna provincia que adhiera al régimen de unificación de impuestos puede aplicar gravámenes similares. Entonces, para hacer notar que sobre el stock existente puede continuar aplicándolos, quise hacer la salvedad expresa.

Ese fué el objeto del párrafo.

**Sr. Simón Padrós.** — Muy bien; puede incorporarse.

Si el señor presidente tuviera la atención de hacer leer la redacción de ayer, veríamos hasta qué punto queda desplazada la redacción de la comisión para formular un solo despacho, que consistiría en el primero y segundo párrafos de la proposición del señor diputado Ghioldi y en el último párrafo del despacho de la comisión en mayoría.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a leer.

**Sr. Secretario** (Zavalla Carbó). — Quedaría en los siguientes términos: «Las provincias productoras de azúcar que adhieran a esta ley podrán aplicar sus actuales leyes impositivas sobre

los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935. El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares elaborados después del 1º de Enero de 1935.»

**Sr. Simón Padrós.** — Si me permite...

A continuación del primer párrafo de la proposición del señor diputado Ghioldi, iría la frase: «debiendo debitarse a las provincias las sumas que cobrarán después del 1º de Enero».

Ese concepto tiene que ser agregado así, porque es el que faculta a las provincias a seguir percibiendo.

En definitiva, propondría al señor diputado Ghioldi, para la ilación necesaria y para que quede completamente aclarado el concepto, que el segundo párrafo pase a ser primero, y entonces el segundo se vincula con el final: «debiendo debitarse a la provincia», y así tiene la debida relación.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — La Presidencia invita a los señores diputados que han formulado las proposiciones, a ponerse de acuerdo para someter a la Honorable Cámara la redacción definitiva.

**Sr. Ghioldi.** — Estamos de acuerdo; sólo faltaría el acuerdo material.

**Sr. Simón Padrós.** — Solicitaría la lectura del texto en la forma que he indicado, y creo que el señor diputado Ghioldi encontrará que han sido interpretados claramente sus deseos.

**Sr. Ahumada.** — Pido la palabra.

No es posible, señor presidente, que en un asunto de esta índole se obligue a los diputados a votar improvisadamente. Ayer la comisión creyó terminar con el asunto, y ahora parece haberse encontrado con una novedad que obliga a hacer una nueva redacción del artículo.

Hago indicación para que se postergue la consideración de esta disposición hasta que los miembros de la comisión puedan ponerse de acuerdo y traer su despacho definitivo a resolución de la Cámara.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — La Presidencia lo había propuesto a los señores diputados, pero los señores diputados arguyen, con razón, que sólo falta se pongan de acuerdo en la con-

fección material del texto de la disposición.

**Sr. Ahumada.** — Se trata de una redacción que se propone inesperadamente en este momento, y deben todos los miembros de la comisión tener la oportunidad de considerar lo que será el despacho definitivo de la misma.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Invito al señor diputado por Tucumán a dar lectura de la forma en que quedaría redactado el artículo.

**Sr. Simón Padrós.** — «El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares elaborados después del 1º de Enero de 1935. Las provincias productoras de azúcar que adhieran a esta ley podrán aplicar sus actuales leyes impositivas sobre los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935, debiendo debitarse a las provincias las sumas que cobren después del 1º de Enero. El Banco de la Nación dividirá el total debitado en tantas cuotas diarias iguales como las que correspondan a un período de 12 meses, y las irá restando de lo que deba acreditar a la respectiva provincia, a partir de la fecha de su adhesión, entregando su importe al gobierno nacional.»

**Sr. Bogliolo.** — No se olvide del agregado.

**Sr. Simón Padrós.** — Quiero hacer notar al señor diputado por Catamarca que no ha variado fundamentalmente el concepto.

**Sr. Ahumada.** — Ya voy a demostrarle que ha variado fundamentalmente, si es que se quiere discutir ahora el asunto. Pero insisto en la conveniencia de que sea postergado, postergación que puede ser de sólo breves minutos.

**Sr. Ghioldi.** — No hay inconveniente alguno en la postergación.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — En consideración la moción de aplazamiento formulada por el señor diputado por Catamarca.

—Se vota, y es aprobada.

**Sr. Dickmann** (A.). — Se podría encomendar a los señores diputados que han intervenido en el debate, la redacción definitiva del artículo.

—Apoyado.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — La Presidencia, haciéndose eco de las manifestaciones formuladas, invita a los señores diputados proponentes a ponerse de acuerdo en la confección de una proposición que pueda ser sometida a la consideración de la Honorable Cámara.

Corresponde considerar la parte del mismo artículo que se refiere al impuesto a la cerveza.

Se va a dar lectura del despacho.

—Se lee:

La cerveza genuina elaborada exclusivamente con malta proveniente de cebada argentina, pagará \$ 0,05 moneda nacional por litro.

La cerveza genuina elaborada con malta proveniente de cebada extranjera o con mezclas de maltas provenientes de cebada argentina y extranjera, cualesquiera sean las proporciones en que ambas se empleen, pagará \$ 0,08 m/n. por litro.

**Sr. González** (B. S.). — ¿Y el párrafo final?

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se considerará separadamente el párrafo final.

En consideración el despacho, en la parte de que se ha dado lectura.

**Sr. Besasso.** — Pido la palabra.

Voy a impugnar, señor presidente, el despacho de la mayoría de la comisión en el punto relativo a la cerveza. Este producto ha sido objeto por parte de la mayoría de una consideración de privilegio que nosotros no podemos, desde luego, consentir en silencio. Se trata de una prerrogativa que aparece sin tener siquiera la apariencia de un privilegio fundado.

En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación se establecía para la cerveza un aumento de un centavo y medio, en lo que se refiere a la tasa nacional en vigencia. La mayoría de la Comisión de Presupuesto, al concretar su despacho sobre unificación de impuestos internos, ha establecido una modificación que importa reducir en medio centavo el gravamen proyectado por el Poder Ejecutivo nacional. No encontramos, señores diputados, la

razón en virtud de la cual se puede fundar esta política de privilegio y de protección irritante que se ha observado por parte de la mayoría de la comisión con respecto a la cerveza; pero resulta más irritante el privilegio si se tiene en cuenta que no sólo se reduce el monto del gravamen proyectado por el Poder Ejecutivo, sino que finalmente se llegará a reducir en una proporción aproximada del 50 % el gravamen a la cerveza, si se consideran las tasas de impuesto fiscal en el orden provincial que inciden sobre la misma, y que la ley de unificación de impuestos internos va a dejar en lo sucesivo sin efecto, así que sea aprobada por el Congreso de la Nación.

Yo deseo dar a la Honorable Cámara la impresión concreta, irrefutable, de la razón que nos asiste para impugnar esta parte del despacho de la mayoría de la comisión. No tenemos noticias de que interés público alguno, ponderable, pueda respaldar esta política seguida por la mayoría de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué razones poderosas en una vía de tan franco y abierto pro a la mayoría con respecto a la cerveza en una vía de tan franco y abierto proteccionismo? Es evidente, señor presidente, que un espíritu corporativo ha presidido en buena parte en su estructura general, los proyectos despachados por la mayoría de la comisión, y ese interés corporativo que por un lado favorece a algunas industrias y comercios del país, y por otro perjudica a otras, nosotros no lo podemos aceptar, sobre todo cuando se puede llegar a la conclusión de que mientras la cerveza es objeto de una política de privilegio y de favor, artículos de otra índole más nobles, más ponderables desde el punto de vista del consumo popular, aparecen gravados sin ninguna consideración por parte de la mayoría de la comisión.

Yo desco hacer notar en qué condiciones se encuentra la cerveza como producto nacional desde el punto de vista de la política impositiva en el país hasta este momento.

La provincia de Mendoza tiene fijado un impuesto de 3 centavos por

litro, y en ese concepto ha recaudado en el año 1932 la suma de 46.524,15 pesos. La provincia de Buenos Aires, por ley 4.197, establece para la cerveza los siguientes impuestos por categoría: la cerveza y las maltas o extractos, malta nacional o importados, destinados al consumo de la provincia, paga por botella hasta 40 centilitros, 2 centavos; hasta 70 centilitros, 3 centavos; en envases mayores de litro o fracción de litro, 4 centavos. La cerveza llamada floja, que se vende a menos de 21 centavos, paga la mitad de los impuestos establecidos en esta ley. La provincia de Buenos Aires por este concepto ha recaudado en el año 1932 la suma de 1.042.354,77 pesos.

La provincia de Santa Fe fija en su ley de impuesto un gravamen a la cerveza de 3 centavos por cada litro de cerveza contenida en envases mayores, y luego fija otro gravamen diferencial por docena de botellas, en la siguiente proporción: docena de botellas hasta un cuarto de litro, 8 centavos; de medio litro, 12 centavos; de dos tercios, 16 centavos; y de litro, 24 centavos. En ese concepto la provincia de Santa Fe ha recaudado en 1932 la suma de pesos 210.259,38.

La provincia de Córdoba fija a la cerveza los siguientes impuestos: por litro, en envases mayores, 5 centavos; en botellas de tres cuartos de litro, cada una 4 centavos; en media botella, 2 centavos. Como producido de estos gravámenes la provincia recaudó en 1932 la suma de 491.766,81.

Es conocido el caso de la provincia de San Juan, donde existe un impuesto de 20 centavos por litro, a la cerveza introducida a esa provincia de otras zonas del país.

La provincia de Entre Ríos establece para la cerveza el siguiente gravamen: envases hasta de medio litro, 2 centavos; en envases mayores de litro o fracción, 5 centavos. En este rubro la provincia de Entre Ríos ha recaudado, durante el año 1932, la suma de pesos 148.741,69. Tucumán tiene fijado a la cerveza los siguientes impuestos: en botella hasta de un litro, 6 centavos;



hasta de medio litro, 5 centavos; la que se vende suelta, por litro, 5 centavos. La recaudación de esta provincia, por el impuesto a que acabo de referirme, alcanzó, también, en el año 1932, a la suma de 192.426,16 pesos.

Salta, tiene establecido sobre la cerveza los siguientes gravámenes: por botella, hasta 400 gramos de capacidad, 5 centavos; hasta 600 gramos, 7 ½ centavos; hasta 700 gramos, 10 centavos; hasta 1.000 gramos, 15 centavos.

De esta manera, podría seguir enumerando las cargas tributarias que pesan sobre la cerveza en las distintas provincias argentinas restantes, llegando a la conclusión que aparece en un interesante informe suministrado por el señor Alfredo Goffi, inspector de alcoholes — que es el que me ha guiado en esta información — de que en el término de nueve años a contar desde 1924 a 1932, se ha recaudado en concepto de impuestos provinciales a la cerveza la suma de 31.769.881,41 pesos. Dicha suma ya no la pagará en lo sucesivo este producto nacional.

Es evidente, entonces, el privilegio que concede a la cerveza la mayoría de la Comisión de Presupuesto en el despacho que se encuentra a consideración de la Honorable Cámara.

Y por si fuera necesario una consideración más a los efectos de explicar en forma matemática la posición anterior, tomando a la cerveza como renglón imponible, con respecto a la situación, en que quedará después de la aprobación de este despacho redactado por la mayoría, podemos hacer la siguiente: el gravamen nacional a la cerveza con relación a la provincia de Buenos Aires, es actualmente de 8 centavos por litro; con relación a Mendoza, 7 centavos por litro; a Santa Fe, 6 centavos por litro; a Córdoba, 9 centavos por litro; a San Juan, aproximadamente 24; a Entre Ríos, 9 centavos por litro; a Tucumán, 9 centavos por litro; a Salta, 14 centavos por litro; a Santiago del Estero, 9 centavos por litro; a Jujuy, 9 centavos por litro; a Corrientes, 9 centavos por litro; a San Luis, 9 centavos por litro; a Catamarca,

7 centavos por litro, y a La Rioja, 16 centavos por litro.

Este es el estado actual del punto de vista de los gravámenes existentes en el orden nacional en las distintas provincias argentinas, lo que arroja un término medio de 9 ½ centavos de impuesto por litro de cerveza, cifra que queda ahora reducida a 5 centavos por litro, de acuerdo con el despacho presentado por la mayoría de la Comisión de Presupuesto.

Ese despacho aumenta en cierto modo, repito, el privilegio que ya concedía en su proyecto el Poder Ejecutivo nacional en cuanto establecía un impuesto de 5 ½ centavos por litro, equivaliendo a un aumento de 1 ½ centavos sobre el gravamen que tiene actualmente por la tasa nacional.

Aparte de esta política impositiva de franco privilegio, de escandaloso proteccionismo, que con respecto a este producto ha seguido la mayoría de la comisión, se patentiza mejor la situación si se considera que a la cerveza se le exime por los proyectos de la mayoría, del gravamen a las ventas y que se coloca a este producto dentro del proyecto de unificación de impuestos internos con el privilegio de no modificar el gravamen de 5 centavos que proyecta la comisión por el término de diez años.

Es comprensible, señores diputados, que la representación socialista no pueda aceptar en silencio esta situación. En base de estas razones concretamente expresadas, abonadas por cifras irrefutables, vamos a pedir, pues, haciendo un llamado a la cordura de la Cámara, incluso a la mayoría de la Comisión de Presupuesto, que por lo menos se eleve a 5 ½ centavos el gravamen a la cerveza, haciendo una traslación de este punto relativo a la cerveza, contenido en el despacho sobre unificación de impuestos internos, agregándolo como parte final al artículo 16 del despacho de la mayoría de la comisión sobre modificación de las tasas de impuestos internos en vigor.

Sólo deseo agregar para terminar, que nos ha sorprendido que no obs-

tante ser la cerveza un producto que al parecer no ha sido motivo de demandas y exigencias por parte de los industriales, que han estado ausentes, haya estado sin embargo tan presente en el espíritu y en el recuerdo de los diputados que componen la mayoría de la comisión.

Nada más. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Groppo.** — Pido la palabra.

Debo informar brevemente a la Cámara sobre la forma en que la Comisión de Presupuesto ha encarado este asunto.

Al tratarse en la comisión el proyecto de unificación de impuestos internos, los representantes de la provincia de Buenos Aires nos pusimos en contacto con los representantes del Poder Ejecutivo de la provincia y con los legisladores provinciales, para enterarlos de la cuestión que teníamos a estudio, y de los detalles de la misma, porque entendíamos que debíamos compartir el conocimiento y estudio del asunto, con los representantes a que me refiero, por tener que realizarse de inmediato el convenio entre la Nación y la provincia, sin el cual la ley no tendría resultado práctico.

Al tratar los diversos puntos a que se refiere el proyecto, la primera cuestión considerada, fué la necesidad de respetar la situación de ciertos impuestos provinciales contemplados por el anterior artículo 19 del primitivo proyecto del Poder Ejecutivo y los actuales artículos 20, 21 y 22. Se estableció que la provincia haría decididamente hincapié en que eso fuera respetado.

Llamo en ese sentido la atención de la Cámara y le hago notar que en todo lo que respecta a tasas impositivas que la provincia tenga establecidas por leyes de carácter general, queda afectado este producto, y que por el apartado especial final del artículo 22, toda patente general o específica municipal que pudieran tener las fábricas productoras de cerveza u otras de productos unificados por esta ley, será también respetada, es decir, que po-

drán seguir siendo aplicadas en los años siguientes.

Entrando a la materia, cuando se trataron estos asuntos en el seno de la comisión, se estudió el aspecto de la unificación de impuestos en los puntos principales, vale decir en cuanto a la unificación y consolidación de impuestos al vino y al azúcar. Algunos estuvimos de acuerdo en que el tratamiento debía ser homogéneo, igual, para productos de idéntica naturaleza y para productos que en el mercado comercial sufren mutua competencia. Fué así que se nos encomendó también que contempláramos, y todos estuvimos de acuerdo, la situación de las fábricas productoras de estas sustancias, de la provincia de Buenos Aires, que no solamente tienen su problema de fábrica, sino también de producción, de materia prima, ya que existe en la provincia de Buenos Aires, en una extensión de más de 200.000 hectáreas, tierras dedicadas al cultivo de la cebada cervecera.

El problema que nosotros hemos contemplado es el que esta Cámara ha escuchado de varios oradores que han abordado la cuestión. El impuesto no lo paga siempre a quien se le cobra, se ha dicho en este recinto; y, efectivamente, la traslación del impuesto es una cuestión en materia de industria, perfectamente clara y conocida.

La suba del impuesto es una traslación inmediata del que lo paga, vale decir del industrial, al productor, y el productor, en este caso, sería el agricultor de la materia prima dentro de la provincia de Buenos Aires.

Nosotros percibimos y hemos contemplado esta situación en la misma situación de otros productos similares. No creemos que la cerveza sea peor ni mejor que el vino. El uso excesivo de la una como del otro, no creemos que pueda llevar al organismo ningún beneficio.

Pero cuando se ha hablado de cifras, como las que ha citado el señor diputado, correspondientes a tasas impositivas y a recaudación, voy a tener ocasión de hacer algunas observaciones.

Respecto a esta situación, nosotros

hemos votado en el seno de la subcomisión un tratamiento igual que el que la comisión ha dispensado al producto vino; vale decir, su consolidación, con el fin, señores diputados de que circunstancias especiales de desorbitación fiscal no puedan colocar este producto — que tiene una intensa colocación en las provincias, pero cuyo consumo, como veremos, ha descendido — en una diferencia enorme, pudiendo el impuesto ser subido todos los años, en tanto que tuviera obligación de quedar estabilizado el impuesto al producto similar.

La equiparación la hemos pedido, precisamente, para contemplar una situación de justa igualdad.

Por lo demás, esta ley de unificación tiende a la desgravación de la doble tasa y no a la agravación fiscal por una tasa única.

En cuanto a las cifras que se han dado, de las tasas impositivas que ha abonado la cerveza en los diez últimos años, son perfectamente exactas; han sido extraídas de un trabajo interesante del señor Goñi.

Pero voy a advertir a los señores diputados que los hechos no son a este respecto tan exactos como a primera vista parecería. La cerveza es un producto que ha sufrido en el consumo la caída más brusca que se pueda imaginar. Tengo aquí los datos oficiales suministrados por el Ministerio de Hacienda, que dicen lo siguiente: la cerveza consumida en el año 1925 fué de 200 y pico de millones de litros; en el año 1926, de 202 millones; en el año 1929, de 213 millones; y desde esta fecha un promedio de 210 millones. La caída del consumo es tan brusca, que en el año 1933 se han consumido sólo 98 millones de litros de cerveza. No es que la prosperidad de la industria me preocupe ni me interese, a pesar de que se está difundiendo en muchas fábricas y manos, sino que demuestra las perturbaciones que puede traer para los cultivadores y para las tierras en que se siembra el producto originario, si se establece un impuesto diferencial con el

producto similar, que haga disminuir mucho más el consumo en el mercado.

Las cifras que he leído me han sido suministradas por el Ministerio de Hacienda de la Nación, de manera que se trata de datos oficiales.

Los datos que nosotros hemos recogido en la provincia de Buenos Aires, establecen que la superficie sembrada en el territorio Sur y Oeste de la provincia, es aproximadamente de doscientas mil hectáreas de cebada cervecera y que en la actualidad se paga, por ese producto, un precio bastante aceptable. Los datos oficiales nos dan el de 6,80, 7 y 8 pesos.

En cuanto a que la comisión no haya recibido solicitudes, debo decir que he recibido particularmente un telegrama de los agricultores y de los sembradores de esta cebada, telegrama que tengo en mi banca, en el que piden, precisamente, que contemplemos la situación en su aspecto fiscal, con los productos similares, y creo que en la misma forma se han dirigido al señor presidente de la Comisión de Presupuesto.

Yo noto, señor presidente, en materia de tasas impositivas, lo siguiente:

Este producto ha abonado en la provincia de Buenos Aires el impuesto a que se ha hecho referencia, el diferencial de 4 centavos, como ha abonado en casi todas las provincias un impuesto más o menos parecido, que ha redituado en diez años la cifra a que el señor diputado ha hecho referencia, diez años de mayor consumo que en lo que va de los años 1933 a 1934. Pero no debemos dejar de advertir que las mismas tasas impositivas de duplicación, por así decir, han existido para el producto similar — me refiero al vino — que todas las provincias tienen gravado en la misma forma, algunas más, algunas menos.

De manera que si al unificar el impuesto a ese producto se hicieran las cuentas en la misma forma, se tendría la misma operación aritmética. La cifra de lo recaudado en las épocas anteriores sería mayor que con el nuevo sistema impositivo, vale decir, comple-

tamente distinta a la recaudación de la actualidad con el futuro.

En cuanto al hecho de que hemos modificado el sistema de imposición, el sistema que ha establecido la Comisión de Presupuesto es el que ha sido propuesto por la Administración de Impuestos Internos: no hemos hecho sino copiar lo que ellos han remitido como anteproyecto. De las conversaciones posteriores, y por nota particular que tengo en mi banca, se declaran los miembros de esa administración los más entusiastas defensores del nuevo sistema establecido.

Hemos creado dos tipos de la bebida alcohólica que se llama cerveza, y solamente dos tipos; uno genuino y otro no genuino. Como decía el señor diputado Bunge en la sesión de ayer, se ha hecho un franco adelanto en la clasificación de este producto. Dentro del producto, a lo genuino se le ha aplicado un solo impuesto máximo, una tasa superior. Y dentro del producto genuino, se ha establecido una diferencia clara y perfecta: la cerveza fabricada con malta nacional, vale decir con malta hecha de cebadas argentinas, pagará 5 centavos por litro; y lo importante es el segundo apartado: la cerveza que contenga cualquiera proporción de malta extranjera — cuya situación era la que dificultaba el sistema impositivo anterior trayendo graves perturbaciones a la Administración de Impuestos Internos, como lo manifiesta en la nota enviada cuando fué pedida su opinión y como lo demuestra en la planilla remitida para evidenciar el sistema complicado que tenían que aplicar — pagará 8 centavos. Quiere decir que en conjunto no ha habido descenso en el sistema impositivo que se ha establecido.

También se ha hecho a este respecto una apreciación, que no calificaré de errónea, pero que es posible que no haya sido interpretada debidamente. Es exacto que en la provincia este producto tenía una doble tasa impositiva de lo que en ella se consumía, pero no hay que olvidar que el 70 % del producto lo absorbe y se absorbería en la Capital Federal, donde regía la

patente mínima, inferior a la actual. Tengo aquí datos oficiales según los cuales, de los 55.000.000 de litros fabricados en la provincia de Buenos Aires, solamente 21.000.000 de litros fueron absorbidos en la provincia: el resto se entraba a la Capital Federal con la tasa mínima de impuestos, es decir, más bajo que el actual. De manera, entonces, que hay que contemplar las cosas desde todas sus fases y no dejar de desconocer que no se trata de una situación de tan enorme privilegio, como se la ha querido presentar en este recinto.

En cuanto a la especificación de la tasa impositiva por maltas argentinas, el despacho no lleva ninguna agresión, a ninguna industria privada, ni tampoco favorece a ninguna otra. En el país se producen maltas suficientes para la elaboración de toda la cerveza que se consume, y la única cervecería nueva que, según datos obtenidos de las oficinas respectivas — que los hemos recabado para no lastimar inconscientemente intereses creados y dignos de ser respetados — no tenía su fábrica instalada, está terminándola en la Capital Federal. Es la Nueva Cervecería Argentina, sociedad constituida por un enorme número de pequeños accionistas argentinos. De manera que en ese sentido, el proyecto contempla situaciones perfectamente atendibles de interés de trabajadores de una extensa zona del país. No se trata de un privilegio particular para nada y para nadie.

Creo entonces, señor presidente, que se puede encarar esta situación con toda tranquilidad. Se trata de un producto que indiscutiblemente podrá resistir el impuesto y trata de una industria más propia que su similar, la del vino. No lo discuto. Pero no olvidemos que el Congreso nunca ha estado remiso en atacar las ganancias de los que así las obtienen. Si esas empresas ganan, si estas industrias son prósperas, no olvidemos que hemos dictado una ley de impuestos a los réditos, que absorbe una buena parte de las ganancias que obtengan.

En cuanto a la situación de privile-

gio excesivo, vuelvo a repetir, señores diputados, que no existe. Justamente un diputado por la provincia de Buenos Aires me decía, refiriéndose a una industria establecida en su localidad: si se aplicara a esta industria un impuesto mayor, la fábrica que está instalada donde yo resido, me ha notificado que tendría que cerrar. Son, pues, fábricas que se resienten a la suba de impuestos municipales y declaro a la Honorable Cámara que estas industrias no están exentas de ninguno de los impuestos que actualmente se pagan en la provincia de Buenos Aires al fisco provincial y a las municipalidades respectivas.

Hecha esta aclaración y sin ánimo de defender un asunto sin más entusiasmo que el de dejar establecida la verdad, según ya lo he declarado, solicito de la Honorable Cámara se pronuncie por el mantenimiento del despacho de la comisión tal cual está redactado.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a dar lectura por Secretaría del despacho de la comisión.

—Se lee:

La cerveza genuina elaborada exclusivamente con malta proveniente de cebada argentina, pagará \$ 0,05 moneda nacional por litro. La cerveza genuina elaborada con malta proveniente de cebada extranjera o con mezclas de maltas provenientes de cebada argentina y extranjera, cualesquiera sean las proporciones en que ambas se empleen, pagará \$ 0,08 moneda nacional por litro.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — En consideración el último apartado del artículo, que se refiere a la misma materia.

Se va a dar lectura.

—Se lee:

Estos impuestos quedan consolidados en las cantidades expresadas durante el término de 10 años y regirán desde el 1° de Enero de 1935.

**Sr. Ghioldi.** — Pido votación nominal sobre este artículo, respecto del cual no he encontrado una explicación racional.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

**Sr. Castro.** — Que se lea lo que se va a votar.

—Se lee nuevamente.

**Sr. Bunge.** — Deseo una aclaración respecto de este párrafo y es si la consolidación significa que estos impuestos no podrán ser aumentados ni disminuidos en un período de diez años.

**Sr. Martínez.** — La contestación surge con sólo formular la pregunta. La consolidación no tiene otro sentido: no se podrán aumentar los impuestos durante diez años.

**Sr. Dickmann (E.).** — Deseo, señor presidente, dejar constancia de mi opinión al respecto.

Considero que, cualquiera sea la votación que recaiga sobre este apartado, ningún Congreso nacional del porvenir podrá abdicar de sus facultades constitucionales en materia de impuestos y que por lo tanto podrá modificarlos, aumentarlos o suprimirlos, según su leal entender.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Tendrá que ser mediante acuerdo con las provincias.

**Sr. Dickmann (E.).** — El Congreso puede constitucionalmente modificar todos los años el régimen impositivo y nacional y no puede este Congreso atar las manos de los congresos del porvenir.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Las ata todos los días.

**Sr. Martínez.** — Efectivamente, así lo hace cada vez que ratifica un tratado con una potencia extranjera. Así, en el último y más importante, el de Roca-Runciman se han consolidado derechos de aduana durante un plazo fijo, sin que eso haya sido objetado, porque no podría serlo.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Y se han consolidado diferencias entre determinados impuestos y la exención de otros. Es una cosa corriente.

**Sr. Martínez.** — Justamente la palabra «consolidación» empleada en la ley, que preocupa a algunos señores diputados, es la que se emplea en todos los tratados; y como ésta es una ley-convenio se ha aplicado igual terminología, porque ella tiene ya un concepto claro y conocido.

**Sr. Corominas Segura.** — Quiero dejar expresa constancia de que voto este artículo, como todo el resto de la ley, en el concepto de que son inalterables los impuestos por el término establecido en la misma. De lo contrario, las legislaturas provinciales no podrían prestar su asentimiento para la adhesión de las respectivas provincias.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar nominalmente.

—Practicada la  votación nominal:

**Sr. Prosecretario (Cullen).** — Han votado 75 señores diputados por la afirmativa y 43 por la negativa, en la siguiente forma:

—Por la afirmativa, los señores diputados: Ahumada, Alonso, Amadeo y Videla, Amoedo, de Andreis, Aráoz (Ernesto M.), Arce, Arrieta, Basualdo, Benegas, Bermúdez, Biancofiore, Bruchou, Buitrago, Bunge, Bustillo, Cáceres, Candia, Cárcano, de las Carreras, Carús, Castro, Contte, Cordero, Corominas Segura, Courel, De Miguel, Escalera, Espil, Fernández, Ferreira, García Gorostiaga, Godfrid, Godoy, Gómez Rincón, González (B. S.), González Guerrico, González Maseda, González (V.), Graffigna, Grisolia, Groppo, Guglielmelli, Iriondo, Jar-del, López, Martínez, Mattos, Padilla, Palacio, Parera, Pintos, Pita, Pueyrredon, Quiroga, Radio, Repetto (A.), Rodríguez, Ruiz, Salcedo, Santillán, Schou Lastra, Simón Padrós, Solari (F. C.), Solís, Speroni, Taboada Mora, Uriburu, de la Vega, Viéchi, Videla Dorna, Videla, Wade, Zarazaga y de la Zerda.

—Por la negativa, los señores dipu-

tados: Agüero, Améri, Arnoldi, Besasso, Bogliolo, Briuolo, Buira, Buyán, Carreras (J.), Castiñeiras, Coca, Delia Latta, Dickmann (A.), Dickmann (E.), Ganza, Ghioldi, Giménez, Inda, Iribarne, Korn, Lamesa, Magris, Marcó, Molina, Moret, Mouchet, Mounesca, Movsichoff, Oddone, Palacín (M.), Palacín (P.), Palmeiro, Parodi, Pena, Pérez Leirós, Pressacco, Ramiconi, Ramírez, Repetto (N.), Rozas, Ruggieri, Solari (J. A.) y Vidal Baignorri.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Queda aprobado el despacho de la comisión.

Ha llegado a la mesa de la Cámara un agregado como despacho de la mayoría de la comisión. Se va a leer por Secretaría.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — Agregar al final del párrafo que se acaba de aprobar, el siguiente: «aplicándose a los mismos las disposiciones de las leyes números 3.764, 4.363 y 11.252 que sean pertinentes».

**Sr. Oddone.** — ¿Qué leyes son?

**Sr. Ministro de Hacienda.** — De procedimientos en impuestos internos.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — En consideración el párrafo reservado del artículo sobre el cual ha recaído nuevo dictamen de la comisión. Se leerá por Secretaría.

—Se lee:

El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares elaborados después del 1º de Enero de 1935.

Las provincias productoras de azúcar que adhieran a esta ley, podrán seguir aplicando sus actuales leyes impositivas sobre los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935, debiendo debitarse a las provincias la suma que cobrasen después de dicha fecha. El Banco de la Nación dividirá el total debitado en tantas cuotas diarias, iguales como las que correspondan a un período de 12 meses, y las irá restando de lo que deba acreditar a la

respectiva provincia, a partir de la fecha de su adhesión entregando su importe al gobierno nacional.

El impuesto interno nacional al azúcar será abonado a la salida de fábrica o aduana en letras a 90 días de plazo.

**Sr. Ahumada.** — Pido la palabra.

Por este despacho se autoriza a las provincias a cobrar exclusivamente el impuesto provincial por el stock de la cosecha de azúcar del año en curso y se faculta simultáneamente a la Nación a debitar a dichas provincias lo que percibían en concepto de tal impuesto después del 1º de Enero de 1935. Creo que con esto se va a llegar a situaciones inequitativas. La provincia de Salta, por ejemplo, tiene el impuesto provincial de  $\frac{1}{2}$  centavo por kilo de azúcar, y sin embargo, al hacerse el promedio de las recaudaciones, la Cámara tomó arbitrariamente como monto de dicho impuesto la suma de un centavo y medio. Esto llevará a la siguiente situación: los industriales pagarán el  $\frac{1}{2}$  centavo a la provincia de Salta y quedarán librados de toda obligación impositiva, y a su vez la Nación liquidará a la provincia de Salta en virtud de esta ley a razón de un centavo y medio. Como la Nación no tendrá derecho para debitar a la provincia sino  $\frac{1}{2}$  centavo, de acuerdo con el texto que se proyecta, quiere decir que en realidad la provincia de Salta, saldrá ganando un centavo por kilo, centavo que lo perderá definitivamente la Nación.

Como en el caso de la provincia de Salta se ha llegado a una solución que desde el punto de vista estrictamente legal es caprichosa, pero que puede tener su justificación desde el punto de vista de la equidad, yo no hago mayor hincapié en esta disidencia y me limito a hacer estas observaciones para justificar mi actitud al pedir que la Cámara no tratara de inmediato el agregado cuya lectura acaba de hacerse por Secretaría.

**Sr. Ghioldi.** — Pido la palabra.

Las manifestaciones que hace el señor diputado por Catamarca son riguro-

rosamente exactas. Su objeción tiene razón de ser y si se hubiese aprobado textualmente la proposición que formulé al comienzo, se habría obviado la dificultad que ahora se plantea. Si nosotros no decimos nada en este instante es por la siguiente razón: la Cámara ha resuelto otorgar a la provincia de Salta una participación en más, de cerca de 400.000 pesos, por el término de los 20 años de la vigencia de la ley. ¿Era éste el momento preciso de hacer notar que ese privilegio, en lugar de ser por veinte años, tendrá que ser por diecinueve años? En esta pregunta está la respuesta de nuestro silencio en estos momentos. Nosotros hemos votado en contra de la concesión otorgada a Salta. No lo certificamos ahora y el proyecto que habíamos presentado era precisamente teniendo en cuenta esa situación.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a votar el inciso en discusión.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

Solicito que el inciso que acaba de ser aprobado quede intercalado en el texto del artículo en su lugar correspondiente, o sea a continuación del inciso que fué votado ayer.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Ya ha tomado debida nota la mesa.

—En discusión el artículo 26.

**Sr. Ghioldi.** — Pido la palabra.

El artículo 26, que se va a discutir ahora, comprende varias cuestiones distintas. Propongo que las discutamos por orden. Que se comience con el primer párrafo, que se refiere a la nafta, se continúe con el petróleo, tabaco y bebidas alcohólicas, y por último, con el azúcar.

—Asentimiento general.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Haciendo asentimiento de la Cámara, así se hará.

**Sr. Godoy.** — Pido la palabra.

Deseo hacer una indicación previa. En la sesión de anteayer quedó en

suspenso un inciso del artículo 19 sujeto a que se le diera redacción definitiva por una subcomisión especial. Como ya ha sido redactado y está el inciso en poder de la Secretaría, pido, entonces, que se dé lectura del mismo y se voté; y como indicación complementaria pido, que se lo incluya como inciso e) del artículo 19, pasando a ser inciso f) el que actualmente está clasificado como e).

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — En consideración la moción que formula el señor diputado, de que se trate el inciso postergado del artículo 19, que debe intercalarse como inciso e), pasando a ser f), el que figura actualmente como e).

Se va a leer.

—Se lee:

Inciso e) Que las provincias productoras adheridas no podrán otorgar primas que tiendan a que los productos gravados con impuestos internos nacionales se vendan fuera de su territorio a menor precio que el corriente dentro del mismo.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — Se va a votar.

—Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente** (Noble R. J.). — En consideración el primer párrafo del artículo 26, que se va a leer.

—Se lee:

El impuesto interno nacional a la nafta queda excluido del régimen de distribución de la presente ley.

—Sin observación, se vota y aprueba.

—En consideración el segundo párrafo del artículo 26: «Las provincias adheridas mantienen el derecho de aplicar gravámenes al petróleo, como también ellas y sus municipalidades, patentes y licencias especiales al comercio de bebidas alcohólicas, tabaco, joyas, naipes y perfumes».

**Sr. Martínez.** — Pido la palabra.

Cuando se discutía el inciso c) del artículo 19, expresé que al tratar esta parte del artículo 26 propondría la ampliación de las excepciones respecto a la facultad de las provincias para imponer o seguir imponiendo a todos los productos de la minería. Pero en la forma restringida que votó la Cámara dicho inciso c) modificando el despacho de la comisión no tiene ya razón de ser mi observación, y por eso desisto de hacer la proposición anunciada.

Las provincias han quedado ya en virtud de aquella reforma con la facultad de establecer impuestos sobre todos los productos de la minería, al reducirse en el inciso c) sólo a los productos alimenticios las limitaciones establecidas.

Ahora, sobre el inciso que está en consideración y que se refiere a dos cosas: primero, a que las provincias mantienen su derecho a fijar impuestos sobre el petróleo, y segundo, que tanto ellas como sus municipalidades pueden otorgar patentes o licencias especiales para el comercio de bebidas alcohólicas, tabacos, joyas, naipes y perfumes, yo creo que en la comisión se nos ha ido un poco la mano, respecto de esta segunda parte.

Es lógico, conveniente y tiene un sentido social el haber dejado en este artículo la facultad a las provincias y a las municipalidades que, con el propósito de combatir el alcoholismo, puedan establecer licencias y patentes especiales para el expendio de bebidas alcohólicas; y que esa excepción se establezca para que no esté en pugna con las disposiciones respectivas de los artículos 20, 21 y 22 de esta ley; pero extender la excepción para que puedan también poner patentes especiales a los comercios que vendan cigarrillos, cigarros, joyas, naipes y perfumes, no encuentro la razón que lo justifique.

Creo, pues, que debe mantenerse la primera parte; y ya que no puedo hacer la indicación a nombre de la comisión, lo hago a título personal: que se supriman las palabras «tabaco, joyas, naipes y perfumes». Esto no quiere decir que se les quite a las provincias la facultad de poner patentes e impuestos generales



sobre los comercios, sino que no podrán ponerlas específicamente por el hecho de vender tabaco, joyas y perfumes.

Tampoco se les quita la facultad que ya tienen las municipalidades para mantener las actuales patentes que gravan esa clase de negocios, porque ese derecho está ya reconocido en el artículo 22 de este despacho.

**Sr. Dickmann (A.).** — Pido la palabra.

Yo debo reconocer que parte del artículo que se está discutiendo es de nuestra factura. Fuimos nosotros los que en el seno de la comisión hemos sostenido la conveniencia en no despojar a las provincias y a los municipios de la facultad que tienen y deben mantener como poder de policía para combatir el alcoholismo, y hemos propuesto que se la excluyera de la renuncia que hacen de esas facultades, para que puedan cooperar con la Nación en gravar con altos impuestos, que ojalá fueran prohibitivos, los despachos de bebidas alcohólicas.

En cuanto a los demás productos que acaba de enunciar el señor diputado por Córdoba, como no se les priva de establecer patentes generales iguales para todos los negocios, no veo tampoco la conveniencia de que se les autorice también a establecer patentes especiales.

Hay comercios, como las farmacias por ejemplo, que además de la patente de tales, pagarían una específica para vender perfumes. Y lo mismo pasaría con los cigarrillos que se venden como anexo a otros negocios. Creo que sería un exceso, sobre todo cuando esos productos pueden ser gravados por la Nación con el monto que ella considerase conveniente en cada oportunidad.

Por consiguiente, mantengo mi proposición primitiva que se refería a las bebidas alcohólicas.

**Sr. Martínez.** — Quiere decir que coincide con lo que yo he propuesto.

**Sr. Dickmann (A.).** — Sí, señor.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

**Sr. Martínez.** — Pido que se vote por partes.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Es lo que corresponde.

Se va a votar el segundo párrafo del artículo 26 del despacho, hasta la expresión: «... bebidas alcohólicas», inclusive.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Se va a votar la parte reservada: «... tabacos, joyas, naipes y perfumes».

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente (Noble R. J.).** — Queda rechazado.

—En consideración el apartado 3º del artículo 26.

**Sr. de la Vega.** — Pido la palabra.

He contribuido, señor presidente, como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y como diputado de la Nación, a la realización de esta obra de legislación que reputo de capital importancia, y cuya aplicación significará la unificación en sus lineamientos más importantes de la vida de la Nación y de las provincias, el saneamiento del régimen fiscal de dichos órganos del Estado y que ha de redundar, al mismo tiempo, en beneficio del pueblo contribuyente.

Para hacerlo, he debido necesariamente apartarme de muchos escrúpulos, sobre todo de orden constitucional, y declaro en esta oportunidad que no estoy absolutamente seguro de que el Congreso de la Nación y las legislaturas de provincia puedan hacer renuncia a sus facultades de crear impuestos en el futuro, según lo impongan las necesidades de la administración, pública nacional o provincial.

Yo no estoy seguro de que pueda ser equiparable esta tramitación, esta vinculación, estos arreglos entre la Nación y las provincias al caso de los tratados internacionales. No estoy seguro, por ejemplo, de que con un artículo, como el que hemos votado, la Suprema Corte se considere con jurisdicción bastante para resolver, sin que haya

una violación del interés privado, las cuestiones que aquéllas promuevan.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No dice eso el artículo.

**Sr. de la Vega.** — Dice eso o algo semejante.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — El artículo no crea la jurisdicción de la corte, porque no podría crearla. Lo único que hace es crear un recurso previo, una medida de emergencia, una medida precautoria.

**Sr. de la Vega.** — Es lo mismo, porque el recurso tendrá que resolverlo la Suprema Corte.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — La medida precautoria es materia de procedimiento.

**Sr. de la Vega.** — Yo no quiero entrar a este aspecto de la cuestión, aunque no tendría inconveniente en hacerlo si se considera indispensable.

La corte ha resuelto, en virtud de una jurisprudencia reiterada, que la ley no puede darle, como tribunal de primera y única instancia, jurisdicción sino en los casos que establece la Constitución.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Es evidente. La comisión lo admite.

**Sr. de la Vega.** — Se ha resuelto más: que cuando interviene en materia impositiva, es mediante la lesión del interés privado...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — O provincial.

**Sr. de la Vega.** — ... para resolver la inconstitucionalidad de la ley, únicamente con referencia al caso privado llevado ante ella, en el sentido estricto que le ha dado a la palabra «caso».

**Sr. Ministro de Hacienda.** — También de acuerdo.

**Sr. de la Vega.** — De manera, que la corte puede tal vez, dentro de ese criterio que la ha caracterizado hasta ahora, declarar que no obstante las disposiciones de esta ley, considerarse sin facultad para resolver esta cuestión de derecho público, que se presentaría sin lesión del interés privado en el caso de que a la Nación o a las provincias les llevaran a una contienda.

No he querido, a designio, fundar

esas disidencias y otras que reputo de carácter secundario ante los propósitos fundamentales y primordiales del proyecto de ley que discutimos. Estoy cierto, o por lo menos es mi anhelo, que cualesquiera sean esos obstáculos, la Nación y las provincias procediendo con el alto criterio con que actualmente estamos legislando sobre esta materia, han de salvar todos los obstáculos de orden constitucional, legal, administrativo o de cualquiera otra naturaleza, a fin de que se realicen los propósitos fundamentales y los grandes objetivos de interés público que nos guían al adoptar estas disposiciones de carácter legal en procura, antes que nada, de la unificación y pacificación económica del país.

Por eso, es que si en este caso hago uso de la palabra para fundar algo que ya no tiene el carácter de una disidencia, lo declaro, con las manifestaciones hechas por el señor ministro de Hacienda y el presidente miembro informante de la Comisión de Presupuestos, me parece que se va a poder precisar mejor el alcance de este apartado 3º del artículo que discutimos, que de ser bien aplicado y bien precisado en sus términos, evitará que a su amparo, mediante la facultad de regulación que se le reconoce a las provincias, aunque sea en una forma condicional, en mi concepto poco clara, pueda ser motivo para anular los grandes propósitos que persigue este proyecto de ley, que son precisamente, como he dicho, la unificación financiera y económica del país mediante la eliminación de toda posibilidad de guerra económica entre las provincias con la Nación o con los territorios nacionales.

Deseo, respecto de este apartado, que ese reconocimiento a las provincias se les haga acondicionando al ejercicio de la facultad que tiene la Nación de dictar leyes generales de regulación de los productos de las industrias y de las actividades lícitas que desarrollan dentro del territorio de la Nación.

He dicho en el seno de la comisión y es exacta la mención que respecto de mí ha hecho el señor diputado Simón

Padrós, que esta clase de medidas de regulación significan facultades concurrentes de las provincias y de la Nación, y he dicho entonces en la comisión y lo repito ahora, algo que es evidente, y es que cada entidad debe obrar naturalmente dentro de sus atribuciones y de sus límites jurisdiccionales. De ahí que entiendo que sería un gran propósito que todo lo que tienda a la regulación de una industria o de un artículo que no se produce en una sola provincia, sino también en otras o en los mismos territorios nacionales, se realice lo más pronto posible mediante una ley nacional que contemple con un criterio superior y concordante todos los intereses en juego, para que así las cargas, obligaciones o beneficios, si los hubiera, sean repartidos con equidad y teniendo en cuenta también algo que es muy esencial que es el consumo del país, y que en definitiva es la base sobre la que deben descansar la prosperidad de las industrias radicadas en la Nación.

**Sr. Pena.** — La facultad de las provincias que consagraría este artículo, está demandada de inconstitucionalidad por una de las entidades afectadas, ante la Corte Suprema; de manera que este artículo vendría a establecer por anticipo, aun con carácter condicional cierta situación de principio a un reconocimiento que está en discusión.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — De ninguna manera.

**Sr. Martínez.** — Entonces, ¿qué sentido tienen las palabras «que les asista»?

**Sr. de la Vega.** — Entiendo que, en primer lugar, el verbo es de carácter condicional.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Y es para que adhieran las provincias, señor diputado por Tucumán.

**Sr. de la Vega.** — Puede mañana influir en el criterio de la corte la determinación aun de carácter legal del Congreso, pero, en definitiva y en materia constitucional, esto no da ni quita derechos.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Evidentemente.

**Sr. de la Vega.** — Por eso es que no me quiero referir a ese antecedente que ha citado el señor diputado Pena y si lo haría sería en el sentido de sostener que tiene toda la razón la Compañía Azucarera Concepción, que ha promovido la demanda, y es en el sentido de negar a la provincia de Tucumán para que so pretexto de regular su producción mediante una ley dictada en 1932, establezca una legislación gravosa sobre el comercio interprovincial, que es materia completamente vedada a las provincias.

Es por eso que me voy a permitir proponer a la Honorable Cámara que este apartado que consideramos, lo condicione al hecho de su vigencia, mientras el Congreso no dicte las leyes de carácter general con el mismo propósito de regulación de productos, etcétera.

Para ello me fundo, también, en un antecedente que para mí tiene importancia. Como consecuencia de la consideración de este proyecto de ley por la Comisión de Presupuesto, ha surgido un proyecto de regulación de la industria vitivinícola que tiene despacho de comisión y que la Cámara tendrá ocasión de tratar dentro de poco, por la vinculación evidente que tiene con el proyecto que actualmente debatimos.

En ese proyecto sobre regulación de la industria vitivinícola, se ha admitido por la mayoría de la comisión, un artículo en virtud del cual la sobretasa y, por consiguiente, el régimen de la ley en lo fundamental, está supeditada a que este derecho de regulación de su producción por las provincias, que les reconoce el apartado a que me refiero, queda condicionado a su ejercicio exclusivo por la Nación.

Yo creo que ese propósito del proyecto de regulación de la industria vitivinícola debe reflejarse en la forma que propongo o en otra, en esta disposición de carácter general que queremos sancionar para el futuro. Pero para mí, lo fundamental y sobre lo cual quiero llamar especialmente la atención de la Cámara, es la necesidad tal vez superabundante, pero siempre

conveniente, para mejor claridad, de que se establezca que el derecho que asista a las provincias para regular el expendio o venta de cualquier producto, tendrá que ser ejercido dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, para que así no quepa la menor duda y estemos de acuerdo con principios indeclinables de la Constitución, que impiden a las provincias establecer aduanas o crear derechos de importación o exportación que graven la libre circulación de las mercaderías, dentro del territorio de la Nación o que puedan también, de una manera o de otra, intervenir, fiscalizar y legislar en todo lo referente al comercio, que es materia exclusivamente de carácter nacional.

**Sr. Dickmann (E.).** — Señor diputado por Tucumán: este artículo se refiere no solamente a expendio o venta, sino también a producción, y la producción no puede ser limitada ya a la provincia; siempre abarca el territorio de la Nación.

**Sr. de la Vega.** — Por eso he dicho que en materia de producción, reconociendo el derecho que tienen las provincias para dictar leyes reguladoras, tal como lo ha declarado en más de un caso la Suprema Corte, se haga aun en ese punto condicionada a que sea, mientras no se dicten leyes de carácter nacional.

Ahora, en lo que se refiere al expendio o venta de productos y mercaderías, mis proposiciones tienden a que desde ya, sin condición de ninguna clase, se ponga expresamente que tienen que ser disposiciones para hacerlas efectivas dentro de las respectivas jurisdicciones territoriales y sin efecto fuera de las mismas. Y tan elemental me parece esto, que aun cuando la Cámara por un error no quisiera incorporar esta disposición de una manera expresa, no puede sino tener efectividad, porque la Cámara y el Congreso, repito, no tienen facultad para dar o quitar derechos en contra de la Constitución nacional.

La tercera observación, que considero de menor importancia, tiende a cambiar el despacho en la parte que dice:

«a imponer el pago de sumas de dinero». En rigor parece que quisiera referirse a multas, y creo que ganaría en propiedad este proyecto de ley, si en lugar de esas palabras pusiéramos el término más genérico, y al mismo tiempo más apropiado, «gravamen».

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Es que no es eso.

**Sr. de la Vega.** — ¿Qué es, entonces, señor ministro?

**Sr. Repetto (N.).** — Se trataría ahora de reducir los gravámenes o de suprimirlos, y el señor diputado los crearía.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — La explicación de esa parte del artículo es muy sencilla. Si no fuera el cobro de sumas de dinero, no tendría por qué figurar nada de eso en esta ley. Se lo ha incluido precisamente para evitar que con el pretexto o por la razón de regular la producción, vayan las provincias a crearse fuentes de recursos.

**Sr. de la Vega.** — Pagar sumas de dinero al Estado por una producción o por un hecho cualquiera, significa genéricamente un gravamen.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Van a decir que no es un gravamen, que es una medida reguladora, que lo que pasa de tal medida, se paga por otro concepto, y que no es impuesto, como se dice hoy en su provincia.

**Sr. de la Vega.** — Es un eufemismo que no encubre la realidad.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Seguiremos al eufemismo donde lo encontremos.

**Sr. de la Vega.** — Es un gravamen. Por ese gravamen se da una letra, que se hace efectiva o no, según si el contribuyente ha estado o no dentro de las disposiciones limitativas de carácter regulador.

Pero en definitiva, sobre este tercer punto no hago cuestión. Me ha parecido, simplemente, que era más general y más propia la palabra «gravamen».

Al dejar fundadas así las modificaciones que proyecto al despacho de la comisión, entiendo contribuir en un aspecto importante de este proyecto de ley a que sean precisadas facultades de orden constitucional y asegurados tam-

bién los propósitos superiores que se persiguen con la sanción de este proyecto de ley.

Nada más. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Ghioldi.** — Pido la palabra.

Cuando se trató en general el despacho de la comisión, me detuve a analizar el problema azucarero tanto en lo que respecta a la tasa como en lo referente al tercer apartado del artículo 26 de la ley. Expresé entonces, y debo repetir ahora, que la Cámara haría bien en suprimir de la ley de unificación de impuestos esta cláusula que nada tiene que hacer con el propósito esencial de la misma.

La ley tiende a la unificación de los impuestos, y haría muy mal la Cámara en aprovechar la oportunidad para dar algún viso de legalidad a las leyes reguladoras que han dictado ciertas provincias, como la de Tucumán, y que constituyen una falta de solidaridad con la Nación.

La redacción misma del artículo 26 es equívoca. Se habla del «derecho que asista a las provincias», como si el Congreso de la Nación pudiera discernir facultades y derechos provinciales y no estuvieran éstos perfectamente establecidos en la Carta Fundamental. Si las provincias tienen algún derecho o creen tenerlo, lo ejercerán de la mejor manera posible y se entenderán en último término con los tribunales del país sin que el Congreso Nacional tenga ahora que hablar de la posible facultad provincial para regular la producción y expendio de un determinado producto.

**Sr. Martínez.** — Ese es el criterio de la comisión.

**Sr. Ghioldi.** — Sí, señor diputado; lo voy a explicar.

A raíz de mis manifestaciones, tanto el señor presidente de la comisión como el señor ministro de Hacienda en las sesiones del 29 y 30 de Noviembre próximo pasado, en la página 3.838 del Diario de Sesiones, aclaran precisamente el concepto.

Se emplea también como expresión, que no corresponde a una ley porque no establece nada concreto, que la regula-

ción debe referirse a propósitos económicos y sociales. Manifestación vaga que nada dice, ni contribuye a aclararnos las ideas.

Pero para mí, el aspecto fundamental del artículo se entiende bien cuando se tiene en la mano la ley reguladora de la producción azucarera y los decretos reglamentarios respectivos que yo he tenido oportunidad de analizar con algún detalle en el debate en general.

Insisto en que esa presunta ley reguladora de la producción tucumana no es nada más que ley reguladora del consumo nacional y no puede corresponder a una provincia regular el comercio de otras provincias, ya que es facultad propia de la Nación.

La ley reguladora tucumana del año 1932 y los dos o tres decretos reglamentarios, establecen la cantidad mensual de azúcar que debe ser entregada al consumo de la Nación. Esa maniobra es característica del monopolio y condenada expresamente por la ley respectiva: se tiende a restringir la cantidad de azúcar en el comercio a objeto de llevar siempre el precio del azúcar al límite de carestía, o tendiendo a él. No sería admisible que el Congreso nacional, aun en forma condicionada como lo interpreta el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, admitiera por un instante la legitimidad y la conveniencia de una ley que, so pretexto de regular la producción, regule el consumo nacional.

Esa ley reguladora del consumo es la última etapa del proceso de monopolio realizado a la sombra de los derechos aduaneros y a nosotros no nos parece propio, aun cuando se trata de una cláusula que en el fondo conceptúa incolora, insípida e inodora, — aplicándole todas las propiedades del agua químicamente pura — que la Cámara le preste su aprobación. Pero así y todo, si en principio ella aprobara este articulado, yo me inclinaría por desnaturalizar totalmente el alcance del mismo, aceptando uno de los agregados propuestos recientemente por el diputado de la Vega, que consiste en que

en último término las provincias sólo tendrían esta facultad dentro de su propio territorio, con lo cual no se interviene en el comercio interprovincial ni en el consumo nacional.

Por estas razones yo me opongo a la cláusula que inicia el párrafo 3º del artículo 26.

**Sr. Simón Padrós.** — Pido la palabra.

Deseo recoger algunas de las manifestaciones hechas y dada la ausencia del señor presidente de la comisión, que había solicitado la palabra, me permito hacer uso de ella para rectificar algunos de los conceptos expuestos.

Coincidiendo en líneas generales con lo expuesto por mi distinguido comprovinciano, el doctor de la Vega.

Es innegable que para aquellas industrias cuyo producto no se elabora exclusivamente en una sola provincia argentina, no puede ni debe haber solución orgánica sin una ley nacional. Y repito lo que dije en oportunidad no muy lejana, de que me sentiría feliz, si antes de abandonar este recinto pudiera poner mi firma al pie de un despacho de ley reguladora del azúcar. Pero mientras no llegue esa situación — y en este sentido aplaudo la iniciativa del primer agregado del señor diputado de la Vega — no comparto el sentido de las opiniones del señor diputado Ghioldi, al decir que la ley reguladora de Tucumán es un síntoma más de monopolio. En forma alguna puede ser atacado lo que hoy día en el mundo entero y en el país argentino es una aspiración hacia la cual concurren todas las soluciones vinculadas a la producción.

No hace muchos meses, que hemos visto cómo el gobierno de la Nación va en ayuda de la producción agrícola del país, estableciendo un precio mínimo, reuniendo en manos del Estado el grueso de la producción cerealista y la facultad de adquirir también la oleaginosa. ¿Y qué ha hecho con esa masa de producción en la mano, sino ordenar el mercado? No ha precipitado la venta; al contrario, la ha mantenido en su poder, para ir eliminándola paulatinamente y no presionar el mercado

mundial, lanzando a breve plazo y en corto término una cifra que, por su magnitud relativa, hubiera podido incidir en el descenso de los precios del cereal en el mundo.

— Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Antenor R. Ferreira.

Si esto ocurre con un producto donde concurren a su misma vez tantas otras naciones exportadoras, con un mercado igualmente mundial consumidor, ¿cómo no va a ocurrir en un renglón como el azúcar, que es de producción y de consumo exclusivamente nacionales? Si esta ordenación de mercado se hubiera obtenido años atrás, no hubiera ocurrido la situación que días pasados le permitió al señor diputado Ghioldi presentarla como una falla de la industria azucarera, al decir que por allá, en el año 1918, el azúcar argentino se vendió a precios sumamente elevados, a lo cual le interrumpí en sentido interrogatorio — sentido que no trajo la versión taquigráfica — preguntándole: ¿Y por qué no venía azúcar del exterior a precio más ventajoso? No venía porque el mercado mundial estaba a límites tan elevados que permitía sostener al mercado argentino el precio al cual se vendieron los azúcares en los meses a que hacía referencia el señor diputado Ghioldi; pero con esta diferencia fundamental: que no fueron precios obtenidos por la industria. Basta recordar los que a ella están vinculados, lo que ocurrió en aquellos años de 1918 y posteriores. La industria vendía su cosecha en bloque, la vendía a medida de su fabricación, precisamente por la falta de organización y de ordenación que tiene hoy el mercado; y no le quepa duda a la Honorable Cámara de que, si el mercado hubiera estado ordenado como hoy, no habrían llegado los azúcares a los precios que la especulación interna permitió y, en todo caso, los precios que podían haber alcanzado habrían sido en alivio de la situación de la industria, caída y afectada en su estabilidad por la pérdida de la caña criolla, al extremo de que

en esos años a que ha hecho referencia el señor diputado por la Capital, la totalidad de la producción alcanzó escasamente a 80.000 toneladas.

La regulación de la producción es, entonces, un concepto que no puede ser discutido, que, por el contrario, tiene que ser alentado y aplaudido, tanto más necesario en aquellas provincias, como Tucumán, en que los factores de producción son tan múltiples, en que la producción es tan compleja, donde hay cerca de 7.000 unidades cañeras independientes, y en que no es posible llegar prácticamente sin ley a soluciones eficaces para regular la producción en equilibrio con el consumo: son factores que no está en la mano del hombre el poderlos regular en sentido individual, y se necesita la acción del Estado provincial, mientras la acción nacional no se ejercite, para que dentro de las fronteras de la provincia, en la producción regional provincial, pueda hacerse una regulación en la que todos los factores de producción, cañeros independientes y cañaverales particulares de los ingenios, contribuyan y colaboren a una solución que sea orgánica y que resuelva los graves problemas que se plantearían si ella no se ejercitara.

En el otro aspecto, el del expendio, el de la venta, no se me oculta que quizá se haya forcejeado los límites de la Constitución. La Corte Suprema de la Nación tiene imperio y autoridad para decir la última palabra a este respecto. Repito que comparto el pensamiento del señor diputado por Tucumán, doctor de la Vega, cuando hoy y el día pasado dijo que las facultades, siendo concurrentes, no pueden ser dadas ni quitadas. La provincia tiene las que le acuerda su Constitución, dentro del régimen de la Constitución nacional. Si se apartara de ellas, no faltaría el pronunciamiento que declarara inconstitucionales sus medidas; y si no se apartara querrá decir que aplicó oportuna y eficazmente las medidas que la opinión ha reclamado.

No tengo inconveniente en apoyar los agregados del señor diputado doctor de la Vega, porque, por encima de

todos los despachos y por encima de todas las soluciones, la necesidad es la suprema ley; y cuando alguna provincia necesite resolver sus problemas, y las soluciones sean reclamadas imperiosamente por todas las fuerzas que la integren, la provincia encontrará la manera de resolverlo sin apartarse de su Constitución provincial y sin alejarse del respeto a la Constitución nacional.

Todos estos conceptos han girado para hacer notar la necesidad de que sea mantenido el despacho de la comisión, con las modificaciones que ha propuesto el señor diputado de la Vega; y dejo así, en breves palabras, defendida mi opinión.

**Sr. Martínez.** — Pido la palabra.

A mi entender, el debate ha sido desviado de su verdadero cauce: no es esta la oportunidad de discutir si la producción debe ser o no regulada, si debe existir una economía libre o una economía dirigida; no es esta la materia que está ahora en consideración de la Honorable Cámara, y cualquier cosa que se aduzca al respecto me parece estaría de más. Tratamos exclusivamente una ley de unificación de impuestos; y lo que dice en los dos últimos párrafos del artículo 26, posiblemente, lo reconozco, con algunos ripios, como lo ha hecho notar el señor diputado Ghioldi, es que so pretexto de regulación, no pueden las provincias crear impuestos; que si en cualquier forma para regular la producción, establecen impuestos, multas o cualquier otra forma de contribución en dinero, ella no puede ir a engrosar sus áreas fiscales, sino que debe incorporarse al fondo de impuestos nacionales unificados.

Ese es el único alcance que le ha dado la Comisión de Presupuesto y Hacienda; esas han sido, más o menos, mis palabras cuando he informado, y esa es también la explicación categórica que ha dado el señor ministro de Hacienda.

No entremos, por tanto, a pronunciarnos sobre si las provincias tienen o no esa facultad. Hemos partido de

un hecho real: en algunas provincias existen leyes reguladoras. No somos la Corte Suprema de Justicia que debe decir su última palabra respecto a la constitucionalidad de esas leyes y hemos creído que sería un grave tropiezo para esta iniciativa si no se dejara a salvo la facultad que pudiera asistir a las provincias. Lo que sí hemos querido establecer expresamente, es que en ninguna forma se podrían crear de nuevo impuestos internos provinciales disfrazados con el propósito de regular la producción provincial.

Creo, por lo tanto, que queda debidamente aclarado este concepto, y la Cámara no debe engolfarse en una discusión sobre si conviene o no regular la producción, si es o no el momento oportuno de una economía dirigida. Quizás tendrá oportunidad la Cámara de hacer un debate al respecto en ocasión próxima. Hoy por hoy debe salvar este punto de vista y pasar adelante en su propósito de dar al país la ley de unificación de impuestos internos; que justamente reclama la opinión pública.

**Sr. Godoy.** — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas, señor presidente, por la razón de que en gran parte yo tengo la responsabilidad de la inclusión de este apartado en el despacho, porque fui el primero que propuso en el seno de la subcomisión el concepto que contiene y fui el autor de la primera redacción que se hizo, que después fué modificada.

El propósito que me animó al pedir aquella inclusión no fué otro que el de dejar bien establecido que por esta ley las provincias no renuncian a la facultad que constitucionalmente tienen de regular su producción dentro, lógicamente, de la esfera legal. Además, el apartado habla de «propósitos económicos y sociales», para dejar bien caracterizado que las provincias renuncian y se les veda que con propósitos fiscales puedan intentar crear gravámenes a la producción, pero que naturalmente, no renuncian a la facultad que les asiste de impedir, dentro de su territorio, el expendio de artículos que

por razones higiénicas, o de otro orden, crean que no deben consumirse, y a la facultad de policía que tienen para regular la producción.

Citaré dos ejemplos ilustrativos. A una provincia no se le puede exigir que renuncie a la facultad de prohibir en absoluto, dentro de su territorio, el expendio de bebidas alcohólicas. Si quiere esa provincia declararse totalmente partidaria de una ley seca, puede sancionarla; y del mismo modo puede una provincia prohibir de manera absoluta, dentro de su territorio, una producción nociva para los intereses generales. Así, si entiende que una plaga vegetal, el sorgo de Aleppo por ejemplo, puede perjudicar los demás cultivos, tiene la facultad indiscutible de proscribirlo dentro de su territorio, por razones superiores de policía.

Asimismo, tiene la facultad de regular la producción con un fin económico, y tal potestad es indiscutible mientras no exceda los límites de su jurisdicción provincial.

Por estos motivos acepto la aclaración propuesta por el señor diputado de la Vega, coincidente con el propósito que me animó al propiciar la introducción de una disposición de esta naturaleza. He querido que quede perfectamente aclarado que las provincias no renuncian a esa facultad que tienen por disposiciones constitucionales.

**Sr. Dickmann (E.).** — Pido la palabra.

En mi entender, el peligro que involucra este inciso no está en el expendio o la venta, sino en la producción.

Regular la producción por las provincias, significa o puede significar lo que no se ha dicho aquí. Puede significar arrancar viñas, abandonar la uva sobre la cepa, derramar vino, quemar cañaverales. Y no son éstas simples hipótesis que yo enuncio, sino cosas que se han hecho.

No hay siquiera impuestos provinciales en la destrucción de cosas, que podrían ser corregidas por la última parte de este párrafo. Es indispensable quitarles esta facultad a las provincias.



Ya que por esta ley se les otorga tantos privilegios, no puede quedar esa facultad antisocial y antieconómica en manos de las provincias. Les hemos discutido siempre esa facultad, la hemos denunciado como una obra destructiva, antieconómica, antinacional; y ahora, por este párrafo, quedaría consagrada esa facultad.

Me ha causado cierta gracia oír al señor diputado por Mendoza decir que alguna provincia se reserva o podría reservarse la facultad de declararse seca: en boca del señor diputado por Mendoza es un propósito que le aplaudo. Pero tal suposición implica desviar el problema.

**Sr. Godoy.** — Lo he dado como un ejemplo.

**Sr. Corominas Segura.** — Es un exceso de argumentación.

**Sr. Dickmann (E.).** — Lo ha dicho el señor diputado Godoy y me ha causado gracia. Provincia la suya húmeda por todos los costados, no podría declararse seca, si bien el clima es muy seco.

**Sr. Godoy.** — Pueden existir otras provincias que quieran declararse secas. Me he querido referir al derecho que tienen.

**Sr. Dickmann (E.).** — Eso está fuera de las posibilidades actuales argentinas; lo que conocemos es lo que he enunciado.

A mi entender, esta ley debe quitar la facultad tal como se establece en el proyecto de ley reguladora de vinos y determinar que durante la vigencia de la ley de unificación, se les quita ese derecho a las provincias vitivinícolas y azucareras. Si en el otro proyecto que viene después de éste se establece esa regla, ¿por qué no vamos a fijarla en éste?

**Sr. de la Vega.** — En ese caso, es porque hay un proyecto de ley reguladora de la industria vitivinícola. Hay una acción nacional.

**Sr. Dickmann (E.).** — A mi entender, esta ley debe establecer una cláusula precisa, que prohíba la regulación de la producción a las provincias y re-

serve esa facultad a la Nación, mientras rija la ley que sancionaremos.

**Sr. de la Vega.** — Yo entiendo que no se le podrá quitar a las provincias la facultad de regular su producción sin que la Nación establezca esa regulación.

**Sr. Dickmann (E.).** — Eso es darle la facultad a la Nación.

**Sr. de la Vega.** — El cambio del enunciado significa que esto durará mientras la Nación no ejercite la facultad de dictar leyes de carácter general para cumplir esa función reguladora.

**Sr. Dickmann (E.).** — La expresión condicional yo la quiero convertir en imperativa: la Nación establecerá la regulación de la producción si fuera necesario.

**Sr. de la Vega.** — ¿Dentro de qué tiempo?

**Sr. Dickmann (E.).** — Yo percibo cierto progreso en las ideas de los señores diputados del Norte: temen ahora la regulación de la producción por las provincias.

**Sr. Simón Padrós.** — Hay tal vez una mayor comprensión en los señores diputados socialistas.

**Sr. Dickmann (E.).** — No; un mayor progreso en las ideas y una mejor comprensión de los intereses, en los señores diputados del Norte. Temen ahora a las leyes provinciales de regulación que están sometidas a oscilaciones, a caprichos y a modos de ser, que no siempre coinciden ni siquiera con el interés provincial.

Si los señores diputados del Norte aceptan ahora que la Nación pueda algún día regular la producción, eso me parece un real progreso.

**Sr. de la Vega.** — Más que aceptarlo, lo deseamos.

**Sr. Repetto (N.).** — Si tienen ley provincial que regula...

**Sr. Simón Padrós.** — Pero no tiene alcance nacional.

**Sr. Repetto (N.).** — ...en una forma monopolista, en perjuicio de todo el país.

**Sr. Simón Padrós.** — Quisiéramos sentirnos más honrados haciéndola nacional.

**Sr. Dickmann (E.).** — Por otra parte, deseo aclarar las ideas expuestas por el señor diputado Simón Padrós. El monopolio en manos privadas es un peligro para la Nación, y el monopolio en manos del Estado — a pesar de que yo no comparto totalmente esta idea — sería una obra de defensa contra el monopolio privado. Actualmente existen en las provincias del Norte monopolios capitalistas privados que constituyen una cosa fundamentalmente distinta al monopolio que, por necesidades económicas y sociales, pudiera existir en algún momento en manos del Estado, que en tal caso habría de ser el Estado nacional, porque no se les podría dejar a los Estados provinciales.

Creo que si se suprime este párrafo sería una buena cosa. Asimismo, yo personalmente estaría por una prescripción terminante que estableciera que sólo la Nación podrá regular la producción de los artículos enumerados en esta ley, mientras ella rija.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pido la palabra.

Coincido en gran parte con lo expuesto por el señor diputado por Tucumán, doctor de la Vega. No estamos acá ni podemos estar en la tarea de atribuir o negar a las provincias las facultades que constitucionalmente tengan o no tengan. No creo que esta disposición legal les atribuya algún derecho que hoy no tienen; ni siquiera lo dice su texto. Parte del supuesto de que existen regulaciones cuantitativas y establece que si esas regulaciones cuantitativas se traducen en el cobro de sumas de dinero, estas sumas no serán para las provincias sino para la Nación, a fin de que las provincias no se vean tentadas a tomar esas medidas.

Si la provincia de Tucumán, por ejemplo prohibiera mañana plantar más del 30 % de la caña plantada el año anterior y mandara destruir por los vigilantes el excedente, una medida de ese orden no tendría nada que ver con esta ley. Serían medidas legales o ilegales, constitucionales o inconstitucionales, punto que resolverían

otros organismos y no el Congreso, pero que nada tendría que ver con la unificación de impuestos. Sólo tiene que ver con esta ley porque la regulación cuantitativa de la producción se hace por vía de impuestos, multas, gravámenes u otras denominaciones precisas o imprecisas del cobro de dinero. De manera que esta disposición es bastante inofensiva.

El señor diputado Dickmann, dijo el otro día, en dos palabras: se trata de una limitación al presunto derecho de las provincias a esa regulación.

**Sr. Dickmann (A.).** — Pero agregué «presunto» porque no admito ese derecho.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Me parece perfectamente exacta la interpretación del señor diputado Dickmann respecto de este artículo. Si es una simple limitación la presunta facultad que tienen las provincias a cobrar, no hace mal a nadie, y mucho menos puede ser impugnado por los que sostienen que esa presunta facultad no existe.

Nada más.

**Sr. Carreras.** — Pido la palabra.

Quiero brevemente dejar constancia de mi voto en contra de este agregado, como asimismo de que sea substituído por ningún otro.

Como tantas veces se ha dicho, especialmente por el señor diputado por Tucumán en forma clara y precisa, no no se podría por una disposición legal, dar o quitar derechos en contra de lo que prescribe la Constitución para las respectivas jurisdicciones de la Nación y de las provincias. Nada se ganaría en consecuencia, con ratificar por el Congreso atribuciones ya establecidas en nuestra Carta Fundamental.

Pero creo que este agregado no es inofensivo e inofensivo, como acaba de decir el señor ministro de Hacienda. Es un agregado que conviene no incorporarlo a la ley. Se trata de un apéndice enfermizo al que debe aplicarse el bisturí para que no infecte el resto del organismo de esta ley, que tiene una finalidad tan noble y conveniente.

Se están discutiendo aquí dos cosas, absolutamente distintas. Por un lado la

unificación de impuestos, que en su sentido filosófico significa también la pacificación económica del país, y por otro lado se pretende discutir una nueva doctrina, con nuevos principios sobre la regulación de la producción o sobre la restricción de la producción o del comercio, cosas que obedecen a otros principios económicos, financieros y sociales, sobre los cuales todos los **diputados** tienen ideas completamente diferentes, no así con respecto a la unificación de impuestos.

De manera que lo más conveniente es suprimir en absoluto este agregado. Los diputados que creemos que no conviene la regulación de la producción, porque por lo general se hace mediante gravámenes o con la restricción a la producción, perjudicando al consumidor, no podemos estar de acuerdo con los otros diputados que ven el asunto desde un punto de vista especialmente fiscal, o bien, más capitalista, de que la restricción de la producción conviene porque aumenta el precio y porque estimula y facilita el monopolio.

Como se ve, son dos cuestiones completamente distintas, y por eso tampoco creo conveniente el agregado del señor diputado por Tucumán, de que las provincias mantengan esta facultad de regular la producción, ya que su derecho está establecido en la Constitución nacional. Si se presenta cualquier conflicto, por ejemplo el de crear impuestos con motivo de regular la producción — posibilidad que, como ha dicho el señor diputado por Córdoba se ha tenido en cuenta en esta parte — la Suprema Corte es la que debe decir la última palabra.

**Sr. Ahumada.** — Disculpeme, señor diputado. Lo que se quiere es evitar ese pleito. Desde ya se hace imposible el pleito, porque se prohíbe terminantemente a las provincias imponer por ese medio cualquier recargo de gravámenes.

**Sr. Carreras.** — No va a hacer imposible acudir al pleito, si cualquier provincia quiere establecer el gravamen, porque no basta una disposición de la ley para fijar la interpretación

de las cláusulas constitucionales. La interpretación corresponde a la Corte.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No se trataría de una interpretación constitucional, sino de la cláusula de una convención entre la Nación y las provincias.

**Sr. Godoy.** — Es una ley contrato. Las provincias se obligarían, si aceptan esta ley, a no imponer contribuciones que sean gravámenes de carácter fiscal, so pretexto de que regulan la producción.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — De modo, que aun cuando tuvieran constitucionalmente derecho, no podrían hacerlo.

**Sr. Carreras.** — Me refería en este momento al agregado que pretendía introducir el señor diputado por Tucumán, en cuanto al ejercicio de esa facultad por las provincias, y manifesté que si por la Constitución tienen esa facultad, el agregado está de más. No me refiero a la ley contrato entre la Nación y las provincias, en cuanto afecta la prohibición inpositiva, sino al nuevo agregado que se pretende hacer de ratificar o interpretar facultades constitucionales.

Nada más.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

En esta ley, según manifestación del propio ministro de Hacienda, no debió entrar el azúcar. Sin embargo, ha entrado el azúcar y desde ese momento, está creando grandes dificultades a esta ley.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Este artículo proviene del vino. Es una proposición del señor diputado por Mendoza. Nada tiene que ver con el azúcar.

**Sr. Pena.** — Pero declaró el señor ministro que en cuanto al azúcar — no en cuanto a esta disposición — pensó mucho si debía introducirlo, o no, en la ley de unificación. Y ahora, una vez introducido, es el azúcar lo que está creando más dificultades a la tramitación de esta ley. Es la cuestión más importante que se debate, porque la del vino se ha resuelto en contra de los principios legislativos que se reclaman desde ese año para poner un poco

de orden en esa industria. Y las dificultades con el azúcar aumentan cuando tratamos artículos que de cualquier manera se refieren al mismo.

¿Tiene algo que ver con la unificación lo que tratamos ahora? No.

**Sr. de la Vega.** — Recién la Cámara votó prohibición de primas. Estrictamente, ¿qué tiene que ver con la unificación de impuestos internos? No hay que olvidar el concepto de esta ley, que es de unificación económica, y que tiende a evitar la guerra económica.

**Sr. Pena.** — Eso estaba muy bien en la proposición originaria del señor diputado por San Juan, que como la presentó, no respondía al concepto que todos teníamos y por eso ha sido modificada en el sentido que yo indiqué, contemplando la prohibición del dumping interno. La Cámara lo aceptó, y está bien dentro de la unificación económica.

**Sr. Carreras.** — Y el mismo señor diputado dijo que se va a llegar a la ley nacional.

**Sr. Pena.** — ¿Por qué está esta disposición? Por una simple razón de orden financiero. El señor presidente de la comisión, dijo que si las provincias cobraran por algún concepto cualquier suma de dinero, no debieran ellas quedarse con las sumas, sino ingresarlas a la cuenta de la Nación. Está, pues, por ese motivo. Y ahora se desata una discusión sobre las facultades propias o concurrentes de las provincias y se habla de un asunto sobre el cual la Suprema Corte no se ha pronunciado, pues es sabido que la ley reguladora de Tucumán ha sido demandada de inconstitucionalidad.

Esta disposición introduce conceptos generales que tienden a presentar como satisfactoria la falta a la solidaridad nacional, de la provincia de Tucumán, dando a su ley una interpretación de propósitos económicos y «sociales».

Ahora se habla de plan y de ordenamiento.

El plan socialista es un plan de ordenamiento, pero no es un plan de ordenamiento de las ganancias de los capitalistas. Es un plan de ordenamiento

social y no un plan para que los capitalistas carguen con las ganancias, y el Estado con las pérdidas. Estamos de acuerdo con los planes siempre que respondan a otros propósitos y tengan otros alcances; no con planes para beneficio de unos cuantos capitalistas que hacen su negocio en silencio y cuando pierden los presentan como obras patrióticas con invocaciones históricas para conmover a los que no entienden de negocios.

Creo, pues, que este asunto tiene que ser excluido de la ley y bastaría a mi juicio que se introdujera en el despacho, en substitución de lo que estamos tratando, una cláusula, que me parece justa, y que la propongo en nombre del sector socialista, después de haber consultado a los compañeros de comisión.

**Sr. Simón Padrós.** — ¿Compañeros de comisión de su sector?

**Sr. Pena.** — Sí, señor diputado.

Los compañeros de representación en la Comisión de Presupuesto creemos que puede ser eliminado ese artículo en la forma en que está redactado, con lo que se suprimiría toda la discusión a ese respecto, evitando así una cuestión que, por una redacción un tanto literaria ya que no es legal, pretende justificar una enormidad, a nuestro juicio, como es la de imprimir propósitos económicos y sociales a una legislación bárbara, típicamente monopolista, a favor de unos cuantos industriales.

**Sr. Simón Padrós.** — Si el señor diputado suprime los adjetivos ganaríamos tiempo, sin complicar el debate.

**Sr. Pena.** — Hablo menos que el señor diputado, de manera que soy más breve.

**Sr. Simón Padrós.** — Es una observación útil.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Sirvase no interrumpir el señor diputado por Tucumán.

**Sr. Pena.** — De manera que todo eso puede obviarse sencillamente con una cláusula que dijera lo siguiente: Toda suma de dinero cobrada por las provincias sobre cualquiera de los produc-

tos gravados por esta ley, ingresará a la cuenta «Impuestos Internos Nacionales».

De tal modo que cualquier suma de dinero que se recaude por las provincias como gravamen a algunos de los productos a que esta ley se refiere, ingresaría a la Nación, y se resolvería el problema que desea la comisión, que es tener el dinero que las provincias pudieran recaudar dentro de esa facultad, sin entrar a un texto legal de definiciones respecto de las legislaciones de provincias, que están discutidas en la justicia en este momento.

De manera que sugiero que el despacho de la comisión en esta parte sea eliminado y substituído únicamente con la redacción que propongo, para obviar una discusión totalmente ajena a los propósitos de esta legislación y que resuelve el único punto que interesa, que es el financiero, en cuanto obliga a entregar a la Nación cualquiera suma que las provincias pudieran recaudar.

**Sr. Repetto (N.).** — Pido la palabra.

Es evidente, señor presidente, que en esta materia de impuestos internos, especialmente cuando ella se vincula al problema del azúcar, caben muchos modos de ver, caben matices distintos aun dentro de grupos tan disciplinados doctrinariamente y tan homogéneos como el socialista.

Yo, antes de votar la proposición que acaba de formular el diputado de mi sector, señor Pena, desearía saber si, aplicada a la ley que se discute la proposición que él propone, terminaríamos con el sistema de documentos o letras que, a título de patente — pero que es completamente ficticio — impone la ley reguladora tucumana a los productores de azúcar, impuesto que es ficticio porque esas letras se devuelven si el productor se ajusta a las disposiciones de la ley.

**Sr. de la Vega.** — Por eso es innoeña la proposición que propone el señor diputado Pena.

**Sr. Repetto (N.).** — Si yo resisto este apartado, es porque me parece que, en lugar de debilitar, viene a robustecer la ley reguladora del azúcar de la

provincia de Tucumán, ley que pone en manos de la provincia el monopolio del comercio del azúcar con evidentes perjuicios para el interés de los consumidores todos, con evidente desmedro para los derechos de la Nación.

Tratándose de una ley que no se refiere para nada al consumo de azúcar en Tucumán, sino que regula con cuantías la salida mensual de la cantidad de azúcar con que contribuye Tucumán al consumo nacional, esa ley infringe una de los preceptos constitucionales más respetables, que es el que atribuye a la Nación el derecho de regular las relaciones del comercio cuando se hace entre provincia y provincia o entre una provincia y el Estado federal. Esa ley implica un régimen monopolístico de la industria y del comercio del azúcar en manos del gobierno de la provincia, con alcances nacionales, y no meramente provinciales como aquí se ha pretendido hacer pasar, porque es una ley que obliga a los industriales a exportar el azúcar fuera de la provincia. Es inconcebible que haya podido ser dictada sin determinar de inmediato las consecuencias constitucionales a que debe dar lugar.

La ley obliga a comprar la caña a los llamados cañeros independientes, y hay en este asunto de los cañeros independientes cosas muy complicadas y muy confusas que no es el caso de determinar ahora, pero que dan lugar a procesos locales que no tienen nada de plausibles ni de laudables; la ley impone el precio de la caña, y prohíbe entregar a la venta en el mercado interno de la República más de la parte proporcional fijada por la Comisión Reguladora del Azúcar; es, en una palabra, un régimen creado para entregar a un gobierno de provincia el monopolio del comercio y la industria del azúcar.

Y por si alguien dudara de lo que yo acabo de decir, voy a dar la substancia de dos de los artículos de uno de los decretos reglamentarios de esta ley, el decreto de Septiembre 13 del año 1932, donde se expone con un desenfado que es realmente desconcertante, este sistema de monopolio que ha implantado el

gobierno de Tucumán para someter al pueblo de toda la República a esta extorsión. El artículo 9º del decreto reglamentario dice así, sin ningún recato, claramente: «Estímanse las necesidades del consumo interno en el período comprendido entre el 9 de Julio y el 31 de Diciembre, en las siguientes cifras: del 9 de Julio al 8 de Agosto, 28.000 toneladas; del 9 de Agosto al 8 de Septiembre, 28.000 toneladas...» E interrumpo la lectura, porque simplemente he querido demostrar con esto que no se trata del consumo interno de la provincia. La ley regula con cuentagotas, como ya dije, el suministro mensual de azúcar al consumo nacional.

Y si cupiera alguna otra duda respecto al alcance monopolístico de esta ley, estaría el artículo 10 del decreto reglamentario, que dice lo siguiente: «Desde el 1º de Enero de 1933 en adelante el consumo del país será atendido sucesivamente mediante cuotas básicas de 28.000 toneladas cada una. Si al fin de cada mes, la cantidad total de azúcar que quede sin entregar fuera superior a 14.000 toneladas, la cuota a entregarse en el mes siguiente sería de 28.000 toneladas, incluido el excedente que se hubiera registrado sobre las 14.000 toneladas. Si, por el contrario, el saldo no entregado descendiera en cualquier fecha a 14.000 toneladas, en cuanto ello se produzca, se entregará al consumo la cuota siguiente.»

De manera, señores diputados, que yo he interpretado el apartado del artículo 26 que discutimos como un reconocimiento nacional de esta ley provincial monopolista. Es la Nación la que ahora reconocería eso, y es la Nación la que incitaría a las otras provincias argentinas a insinuarse por el camino de esta clase de legislación. Por eso, yo desearía saber si sancionado este apartado del artículo 26, la provincia se verá en la obligación de entregar al fisco nacional esas letras que hoy recibe y mantiene en suspenso para devolverlas en la oportunidad necesaria a quien se las ha entregado, después de cumplir con las prescripciones de la ley de monopolio de la provincia. Yo

desearía saber eso y mientras no lo sepa claramente, es evidente que no podría votar la proposición que ha formulado mi compañero de sector, el diputado Pena.

Por otra parte, «La Revista Azucarera», que no interpreta los intereses generales del punto de vista del consumo del azúcar, sino intereses de los industriales, precisamente lo que quiere es que esto se nacionalice, que esta facultad de regular se les reconozca a todas las provincias. Esta revista interpreta el interés de los azucareros de todo el país; por consiguiente, tiene también en cuenta la industria azucarera radicada en otras provincias, fuera de Tucumán, y aspira a que se dicten leyes provinciales reguladoras o alguna ley nacional para acogerse a las mismas ventajas.

Me parece que es un exceso de regulación para una industria que dispone de la aduana, de la ley Saavedra Lamas, de la comisión reguladora del precio del azúcar y que tiene, en una palabra todo lo que puede pedir para hacer la gran prosperidad de sí misma y servir también los intereses del país que la sostiene.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

El despacho de la comisión dice lo siguiente: «Las provincias mantienen asimismo el derecho que les asista a regular con propósitos económicos y sociales la producción, expendio o venta de cualquier producto y a imponer el pago de sumas de dinero para hacer efectivas sus disposiciones a los que las contravengan o excedan los límites señalados. Los fondos que por esa causa se recauden ingresarán a la cuenta «Impuestos Internos Nacionales.»

El problema del azúcar, como está planteado en el país, se desenvuelve hace rato fuera de la ley, a tal extremo que habiendo yo deseado provocar una definición legal por un proyecto que ha pasado a estudio de la Comisión de Negocios Constitucionales, no he conseguido que ella se pronunciara todavía al respecto -después de dos años. He debido, pues, proyectar para

el impuesto interno al azúcar importado una disposición contemplando las situaciones de hecho, haciendo referencia al decreto que fija mensualmente el adicional al azúcar, de modo que no incidiera el impuesto interno en el sentido de elevar el impuesto de aduana más allá del límite legal. He debido, pues, referirme a esa situación de hecho.

Yo hice, con respecto a este artículo, la siguiente composición de lugar; es un artículo cuyo enunciado pretende amparar y legalizar...

**Sr. de la Vega.** — No pretende nada.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No pretende nada de eso, ni busca eso, ni lo dice el texto.

**Sr. Pena.** — El texto de la ley que votaríamos, he dicho que tiene una redacción según la cual se reconoce a las provincias la facultad de ejercer un monopolio contra la Nación, diciendo que lo pueden hacer «con fines económicos y sociales».

**Sr. de la Vega.** — Las provincias mantienen un derecho que creen tener.

**Sr. Pena.** — De manera que esta situación, que es de hecho, es la que ha obligado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a establecer esta disposición con el solo objetivo cual es el de que si alguna suma de dinero ingresa a la provincia como resultado de la aplicación del sistema del pago de letras entregadas por incumplimiento de las disposiciones que establece la ley reguladora, en lugar de quedar las provincias con ella, ingresen al erario nacional.

He querido con mi proposición eliminar lo que me parece, como ha dicho el señor diputado Ghioldi, que afea la ley, lo que puede hacerse con una disposición complementaria y que contemple el aspecto financiero en el sentido de que la Nación tome cualquiera suma cobrada por cualquier concepto sobre las producciones gravadas por esta ley, no esencialmente el azúcar, sino todas, y que ella ingrese al tesoro de la Nación.

El señor diputado por la Capital, doctor Repetto, se refería a la situa-

ción de las letras que se entregan en garantía para cumplir los compromisos de la ley reguladora, situación que por mi parte no he planteado ni contemplado, pues he querido tener en cuenta única y exclusivamente la eliminación total de esta cuestión en la ley que tratamos, que el ingreso de cualquier suma se haga al tesoro nacional en lugar del provincial. En cuanto al procedimiento aplicado por la provincia de Tucumán, he expresado los mismos puntos de vista que el señor diputado por la Capital, sosteniendo que son violatorias de disposiciones constitucionales y que, como he dicho antes y lo repito, los reputo completamente atentatorios de la solidaridad indispensable en la economía nacional por parte de dicha provincia.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Ahumada.** — Personalmente no soy un entusiasta partidario del texto de la ley. Lo he aceptado por espíritu de transacción y porque creo que su alcance en modo alguno es el que quiere dársele por algunos señores diputados del sector socialista.

Que las provincias tengan o no el derecho de regular su producción, es una cuestión que no debe ni puede ser resuelta por el Congreso de la Nación. En todo caso es una cuestión que la resolverá definitivamente el más alto tribunal de la Nación: la Corte Suprema, si algún interés particular afectado promueve el correspondiente litigio. Ese tribunal dará la última palabra sobre esta materia, si tienen o no las provincias el derecho de regular y si tienen ese derecho, si lo han ejercido o no en la medida tolerable; cuestión es ésta, en la que el Congreso haría muy mal en entrometerse, pues no tiene absolutamente nada que hacer en ella.

Entonces, la comisión se ha colocado exclusivamente en la hipótesis de que ese derecho pueda existir y en la hipótesis de que las provincias ejerciendo ese derecho traten de burlar esta ley de unificación de impuestos inter-

nos creando gravámenes o multas. Previendo esa posibilidad, dispone que todos los fondos que las provincias recauden por aplicación de la ley de regulación, ingresarán a la cuenta de impuestos internos nacionales. Se quita así a las provincias todo acicate para utilizar la ley de regulación de la producción con propósitos netamente fiscales, y en esta forma es lógico que ninguna provincia se deslizará por esa pendiente, ya que la ley misma se encarga de prohibírselo.

**Sr. Repetto (N.).** — En el caso de Tucumán el impuesto se disfraza en forma de patente, lo que haría que no cayese bajo la disposición de este apartado. Es una patente la que se impone por la molienda y no un impuesto interno.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — A los efectos de la ley es lo mismo.

**Sr. Repetto (N.).** — El importe de la patente se devuelve después al fabricante si se ha ajustado a las demás prescripciones de la ley.

**Sr. Ahumada.** — En ese caso, si la provincia de Tucumán llegara a percibir el importe de esas letras necesariamente deberá ingresarse ese importe a la cuenta de impuestos internos nacionales.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Eso resultará, no sólo por mandato de la ley, sino por convención entre la Nación y las provincias que la hubieran aceptado. De manera, que suponiendo que tuvieran el derecho de regular la producción por vía de impuesto, ese derecho habría sido ejercitado en la forma de un contrato que atribuye el producido a la Nación.

**Sr. Ahumada.** — Creo que con lo dicho por el señor ministro de Hacienda, por el presidente de la comisión y por los demás miembros que la integramos, quedan allanadas todas las dificultades y explicado el verdadero alcance de este apartado del artículo 26, y creo que no vale la pena seguir discutiendo sobre este asunto que está totalmente aclarado.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar primero el despacho de la comisión.

**Sr. de la Vega.** — Dada la construcción de la cláusula, debe votarse primero el agregado que he propuesto.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Reglamentariamente debe votarse primero el despacho de la comisión.

**Sr. Dickmann (A.).** — Convendría que por Secretaría se leyera el despacho y los agregados propuestos.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a dar lectura.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — El despacho de la comisión dice así: «Las provincias mantienen, asimismo, el derecho que les asiste a regular con propósitos económicos y sociales la producción, expendio o venta de cualquier producto y a imponer el pago de sumas de dinero para hacer efectivas sus disposiciones a los que las contravengan o excedan los límites señalados. Los fondos que por esa causa se recauden ingresarán a la cuenta «Impuestos Internos Nacionales».

Con la modificación propuesta por el señor diputado de la Vega, el apartado quedaría así: «Mientras el Congreso no dicte leyes de carácter general con el mismo propósito, las provincias mantienen asimismo el derecho que les asista a regular con propósitos económicos y sociales la producción, expendio o venta de cualquier producto dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales y a imponer gravámenes que hagan efectivas sus disposiciones a los que las contravengan o excedan los límites señalados. Los fondos que por esa causa se recauden ingresarán a la cuenta «Impuestos Internos Nacionales».

La proposición del señor diputado Pena, en reemplazo de ese parágrafo, dice: «Toda suma de dinero cobrada por las provincias sobre cualquiera de los productos gravados por esta ley, ingresará a la cuenta «Impuestos Internos Nacionales».

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar en primer término el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Pena.** — Que conste nuestro voto en contra.



**Sr. de la Vega.** — Corresponde votar los agregados que he propuesto.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se entiende que han sido rechazados por el voto que acaba de dar la Cámara.

**Sr. de la Vega.** — No, señor presidente; lo que he propuesto no es contradictorio con lo que acaba de sancionar la Cámara. Es en todo caso limitativo y debe ser votado.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Es una redacción distinta.

**Sr. de la Vega.** — Se ha hecho la salvedad de que después se votaría el agregado. En ese sentido he dado mi voto al despacho de la comisión.

**Sr. Ahumada.** — Señor presidente: En realidad lo que propone el señor diputado por Tucumán, no es un agregado, sino la substitución del texto del despacho por otro texto.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Precisamente por eso no corresponde votar.

**Sr. de la Vega.** — He propuesto que al principio de lo que se ha votado se diga: «Mientras el Congreso no dicte leyes de carácter general con el mismo propósito», y que después de las palabras «expendio o venta», se agregue «dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales».

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Son dos agregados.

**Sr. de la Vega.** — Deberán intercalarse esas palabras en la ley, si son aceptadas por la Cámara.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se van a votar como agregados.

Se leerá por Secretaría el primer agregado.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — El primer agregado sería el de las siguientes palabras, al empezar el párrafo: «Mientras el Congreso no dicte leyes de carácter general con el mismo propósito».

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Secretario (Zavalla Carbó).** — La otra proposición del señor diputado por Tucumán, es agregar, después

de las palabras «expendio o venta de cualquier producto», dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales y a imponer gravámenes que hagan efectivas sus disposiciones...

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Coca.** — ¿De cuántos votos?

**Sr. Prosecretario (Madero).** — De 62 votos.

—Sin observación, se aprueba el último párrafo del artículo 26, que dice:

Medidas de ese orden no podrán aplicarse por una provincia en forma que incida sobre la venta o expendio de artículos o productos provenientes de otras provincias o territorios en forma distinta que para los artículos o productos de la propia provincia o para los que salen de la provincia en forma distinta a los que se consumen en ella.

—Se aprueban, sin observación, los artículos 27 y 28.

**Sr. Martínez.** — Pido la palabra.

Prácticamente, con este artículo llegamos al término de la ley de unificación. La Comisión de Presupuesto y Hacienda había agregado las disposiciones que se refieren al reparto del impuesto a los réditos y a las ventas, impuesto este último sobre lo cual la Honorable Cámara oportunamente se pronunciará.

Pero haciendo cargo de las observaciones que fueron formuladas, y sobre todo con el propósito de acelerar la labor legislativa un tanto retardada y a fin de que este proyecto pueda pasar inmediatamente al Senado, convertirse en ley, y dar tiempo a las legislaturas provinciales para que se pronuncien sobre la adhesión, es que solicito la división del mismo; dando así con los artículos aprobados fin a la ley de la unificación. Los otros artículos, aun no tratados, constituirían un nuevo despacho que sería sobre la repartición de los impuestos a que me he referido, de réditos y ventas.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — En consideración.

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra.

Votaré favorablemente la moción formulada por el señor diputado por Córdoba, pero antes deben tratarse los artículos que he propuesto como complementarios de la ley de unificación.

**Sr. Dickmann (A.).** — Pido la palabra.

Creo que la indicación formulada por el señor diputado por Córdoba debe ser ampliada.

Evidentemente la ley debe terminar en este punto, como estaba proyectado en un comienzo. No creo que debamos de inmediato pasar a considerar el reparto del impuesto a los réditos y a las ventas, sin que previamente se apruebe la ley que establece este último impuesto, que por ahora es problemático.

En el orden de las preferencias, debe considerarse antes el proyecto relativo a la Junta Reguladora del Vino, porque tiene atinencia con esta ley. El reparto deberá tratarse si previamente se aprueba el impuesto a las ventas, contra el cual es público y notorio que hemos de hablar y votar negativamente.

**Sr. Arce.** — Pido la palabra.

La ordenación del debate exigiría que la indicación que acaba de formular el señor diputado por la Capital se considerara una vez que se resuelva la del señor diputado por Córdoba, o si se quiere después que se traten algunos agregados que al proyecto de unificación ha propuesto el señor diputado por Mendoza. No valdría la pena anticipar ningún debate sobre réditos y ventas sin terminar con todo lo relativo a la unificación.

Concreto mi indicación en estos términos: que se entre a considerar los agregados referentes al proyecto de unificación de impuestos internos; que se ponga luego el artículo final de forma y que se comunique al Honorable Senado. Después deliberaremos sobre lo que habremos de hacer.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — El señor diputado por Mendoza había propuesto unos agregados y, por consiguiente, debe considerarse su proposición.

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra.

A fin de que la Honorable Cámara ocupe en escucharme el menor tiempo posible y en mi deseo de colaborar en su labor, pido se lean todos los artículos propuestos, para hablar una sola vez.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Se van a leer.

—Se leen:

Artículo 29. — Un Consejo Federal de Impuestos Internos al Consumo, integrado por un delegado del gobierno nacional y uno por cada uno de los gobiernos de las provincias adheridas al régimen de esta ley, intervendrá como control permanente en todo lo que se relacione con la recaudación y distribución de las contribuciones a que la misma se refiere.

Art. 30. — Los delegados serán designados por el gobierno nacional o provincial que representen.

Art. 31. — Todo empleado dependiente de la Administración de Impuestos Internos que deba llenar su cometido permanentemente en jurisdicción provincial, será designado a propuesta del gobierno de la provincia respectiva.

Art. 32. — La disconformidad con las liquidaciones que el Banco de la Nación debe efectuar de acuerdo con los artículos 14 y siguientes, o la demora de éste en la entrega de los recursos correspondientes a una o más provincias, autorizan al o a los delegados respectivos a promover un recurso especial ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital.

Art. 33. — La reclamación ante la Cámara Federal se ajustará al siguiente trámite sumario:

- a) El traslado a la autoridad o funcionario cuyo acto se impugna, será por 5 días improrrogables;
- b) El tribunal podrá acordar un término de prueba no mayor de 10 días;
- c) La sentencia deberá dictarse dentro de los 10 días del llamamiento de autos para definitiva.

**Sr. Corominas Segura.** — Pido la palabra.

Me hago una verdadera violencia, señor presidente, en propiciar la incorporación de estos artículos, ya que deseo empeñosamente contribuir a que la Cámara termine con la consideración de este asunto.

No ignoro las dificultades y los inconvenientes que significa la presentación de artículos nuevos a la consideración de la Cámara, sobre todo cuando se discute una ley que ha sido objeto de un estudio tan minucioso por una comisión amplísima de la Honorable Cámara. No abrigo, tampoco, grandes esperanzas respecto al resultado de las votaciones que recaerán sobre estos artículos y si no obstante ello los presento a la consideración del cuerpo, es porque quiero dejar constancia del recelo con que doy mi voto a este proyecto de ley.

Comprendo las enormes ventajas de carácter económico que derivan de una legislación de la naturaleza de la que la Cámara ha considerado; no puedo ignorar el evidente beneficio que reportará para importantes zonas del país, al evitarse con ella la superposición de impuestos, que traban y dificultan el progreso y el desarrollo industriales.

Pero este es sólo el aspecto económico de la ley, y hay en ella otros dos aspectos que no pueden dejar de contemplarse: el político y el jurídico.

Económicamente los Estados federales habrán de beneficiarse. Las perturbaciones que la superposición de impuestos determina, no son nuevas. El deseo de evitar los graves males de la guerra económica entre las provincias fué uno de los móviles determinantes de la organización constitucional.

Especialmente en la provincia de Mendoza hay al respecto una tradición y antecedentes sumamente interesantes. En Mayo de 1852, en el instante mismo en que el gobernador de la provincia se dirigía a Buenos Aires a tomar intervención en la deliberación que originó el acuerdo de San Nicolás, enviaba a la Legislatura de aquel Estado un proyecto de ley propiciando la supresión de todos los impuestos con que en el terri-

torio de la provincia se gravaban las producciones de las demás.

En ese documento se hablaba en estos términos, que me permito leer por la precisión que los caracteriza:

Mayo 4 de 1852. «Precisado el gobierno por asuntos urgentes de importancia nacional a partir para la de Buenos Aires a la ciudad de San Nicolás en un plazo angustiadísimo, apenas tiene tiempo para dedicar instantes muy cortos a medidas reclamadas por la situación.

«Notorio es que, a presencia de necesidades más o menos urgentes ha inmolado cada provincia la conveniencia pública ante el interés fiscal, gravando con fuertes derechos, al importarse en ellas, las producciones de las demás. Estos derechos reservados con frecuencia, pero siempre y con pocas excepciones en aumento progresivo, han llegado a tal punto por su inestabilidad y exorbitancia que hacen imposible toda especulación; de aquí el aniquilamiento interior entre las provincias, que terminará por su anonadamiento total, trayendo a cada una la completa ruina de su industria, altamente desalentada ya por falta de estímulos.

«A las dos ventajas económicas se asocia el inconveniente poderoso de ser un obstáculo a la conservación del orden constitucional que tanto se anhela, porque es muy difícil, si no imposible, la unión verdadera entre provincias que en el constante choque de sus intereses materiales tienen frecuentes motivos de desinteligencia. La provincia de Mendoza, que entre las del interior ha tomado la iniciativa de una marcha organizada y progresista, debe ser la primera en dar el noble ejemplo de un generoso desprendimiento, aboliendo enteramente derechos nocivos para sí propia y funestos para la Nación.»

Al aceptar, pues, la unificación de los impuestos internos, al colaborar en esta legislación, sacrificando algunas convicciones de orden personal, lo hago acatando y sirviendo una tradición de la provincia en que tiene origen mi mandato; pero creo que es posible co-honestar la coordinación y la armonía

económica del país, con la defensa de la autonomía política.

No hay duda de que un poder sobre la autonomía financiera de los Estados, comporta un poder sobre la autonomía política. Por ello, trato, dentro de lo que es posible, de procurar esa armonización de los intereses económicos y de los intereses institucionales, creando un organismo que constituya un resguardo de la autonomía política. Ese es el objeto del Consejo Federal de Impuestos Internos al Consumo, que propicio.

La autonomía política está íntimamente vinculada con la forma como en el país se contempla en general el problema de la burocracia. Constantemente el Congreso de la Nación crea nuevos organismos destinados a atender importantes necesidades de la República; pero todos ellos se radican en la Capital Federal, y al mismo tiempo que esta gran urbe acentúa su importancia, las provincias ven disminuir la gravitación que les corresponde en el concierto general de los intereses nacionales.

Hay que equilibrar esta extraordinaria gravitación política de la Capital Federal sobre el interior. Hay que atemperarla. Por eso proyecto, también, cierta participación de los gobiernos provinciales en la designación del personal de las oficinas que han de intervenir en el manejo de estos impuestos, que pasan a ser recaudados y distribuidos exclusivamente por la Nación.

Yo sé que ha de decirse al respecto que la designación del personal de la administración pública nacional, corresponde por la Constitución al Poder Ejecutivo; pero destaco, en respuesta, una circunstancia que no puede dejar de contemplarse: no se trata del ejercicio normal y habitual por el Poder Ejecutivo de la Nación de sus facultades constitucionales, sino de reglar cómo ha de procederse en el futuro respecto de organismos, respecto de leyes, que van a disponer sobre materia nueva, en la cual viene a obrarse mediante un acuerdo entre la Nación y las provincias. Es un campo nuevo, y al esta-

blecer cómo ha de actuarse en él, estimo que es perfectamente factible dar intervención a las provincias.

Antes de pasar adelante, para fundar los otros dos artículos que contemplan aspectos de orden jurídico, he de expresar que presumo también, que se ha de argumentar en contra de la creación de este consejo federal, diciendo que él no tiene funciones suficientemente amplias como para que constituya una garantía bastante a asegurar la independencia política de las provincias; o como para que por sí sólo maneje todo lo que se refiere a los impuestos internos al consumo.

No deseo crear obstáculos a la administración nacional en la recaudación y distribución de estos recursos, sino que, únicamente, procuro estructurar un contralor. Pero, si las pocas facultades que le atribuyo al consejo federal fueran motivo de censura, declaro, desde ya, que acepto, complacido, la creación de un consejo autónomo, salvando así esa crítica si llegara a formularse.

Los otros dos artículos se proponen crear, dentro de las normas de esta ley, el recurso jurídico para asegurar la perfecta distribución de los impuestos que se recauden y la inmediata entrega de los mismos, en la proporción que corresponda, a las provincias.

En los artículos que hasta hoy hemos considerado, y aprobado, en dos de ellos, se habla de las acciones para ante la justicia. El artículo 17 se refiere a las acciones penales que se acuerda contra los empleados y funcionarios que, por acción u omisión, perturbaren el cumplimiento de las obligaciones creadas por esta ley o de los derechos que la misma establece para los Estados federales. Ello se relaciona con las penalidades de que serán objeto los empleados o funcionarios que incurran en culpa.

El mismo precepto habla, también, de las acciones civiles de indemnización que podrán ejercer las provincias contra estos funcionarios. Y, luego, en el artículo 24, se ha reglamentado lo que se refiere a las acciones que podrán

ejercerse, o a las medidas que podrán adoptarse cuando una provincia no cumpla con sus obligaciones y establezca leyes impositivas en contra del compromiso que aquí contrae, de no gravar los consumos a que se refiere esta ley.

Pero en ninguna parte hemos creado el recurso necesario para el caso de que la liquidación o distribución de los impuestos no se ajustara a las normas preestablecidas en los demás artículos de la ley de unificación. Sin duda, producida una reclamación por tal motivo habría que radicar el pleito en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante juicio ordinario.

Estimo que la lenta, larga y dificultosa tramitación de un juicio de esa naturaleza, de las provincias contra el Banco de la Nación, encargado de la recaudación, o de las provincias contra la Nación misma por la forma en que se hubieran practicado las liquidaciones, o por la falta de entrega de las rentas, no constituye una garantía suficiente de la estabilidad de los gobiernos provinciales que, privados de los recursos que les corresponden, podrían caer.

En el artículo 32, que proyecto, creo un recurso para ante la Cámara Federal de la Capital, a fin de que ella, en un trámite breve, ponga remedio a cualquiera mala liquidación que se haya hecho por impuestos internos al consumo o a cualquiera retención indebida de lo que les corresponda a las provincias. Se trata de un recurso contencioso-administrativo, porque los actos a que se refiere no son de carácter civil ni comercial, sino actos de poder público.

Estos son, sintéticamente expresados, los motivos que me determinan a proyectar los preceptos que he presentado a la consideración de la Honorable Cámara.

He concluído. (*¡Muy bien!*).

**Sr. Martínez.** — Pido la palabra.

Lamento tener que disentir con las proposiciones que acaba de formular el señor diputado por Mendoza.

Me imagino que para propiciarlas, con el laudable propósito de extremar

las medidas en defensa de la autonomía de las provincias, el señor diputado se ha inspirado, y con justicia, en el recuerdo de su ilustre antecesor el señor gobernador de Mendoza, don Pascual Segura, que fué uno de los firmantes del acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Pero creo que el señor diputado debió seguir también en esto tan esclarecido ejemplo y así como los firmantes del acuerdo procuraron dar bases definitivas a la organización nacional y proveerla de los recursos necesarios para que se realizara dicha unión, así también el señor diputado, no obstante sus sentimientos localistas, tan respetables y que en parte comparto, debe proveer a hacer viable esta ley de unificación de impuestos internos nacionales, removiendo los inconvenientes que puedan retardar su pronta sanción, como es la iniciativa presentada, que en algunos aspectos modifica la estructura del proyecto. Esta idea de un consejo federal integrado por representantes de la Nación y de las provincias para correr con la superintendencia en la aplicación de la ley no es nueva, desde luego. El gobernador de Córdoba, doctor Frías, muy celoso también de la autonomía del Estado que gobierna con el consenso unánime de la opinión, publicó, con motivo de la invitación formulada por la comisión a los representantes de las provincias a la conferencia que estudiaría el proyecto de unificación, un reportaje en el cual entre otras cosas insinuaba la conveniencia de crear un ente autónomo o consejo federal encargado de la percepción y distribución de los impuestos internos que se unificaba y distribuía entre la Nación y las provincias.

Pero en la comisión no prosperó ese pensamiento y sobre él no hicieron hincapié los representantes provinciales, porque se consideró que con la fórmula propiciada por el Poder Ejecutivo y adoptada por la comisión, de instituir al Banco de la Nación como mandatario conjunto de la Nación y de las provincias, quedaban ampliamente satisfechas las exigencias a este res-

pecto, máxime cuando los empleados y funcionarios del Banco quedaban pasibles de sanciones tan graves como las que ha votado la Cámara al sancionar el artículo 17, cuando no hicieran la distribución que automáticamente deben realizar, o no cumplieran las órdenes impartidas por las provincias respecto de los fondos que les hubieran sido acreditados.

Por otra parte, es bueno recordar cuál es la esencia de esta unificación de impuesto. Ella representa en realidad una gran desgravación impositiva. El consumidor argentino tendrá menos impuestos que graven la cerveza, el vino, los tabacos y cigarrillos, cuando no se trate, como es lógico, del consumo local de la Capital y territorios nacionales. Hay, como digo, una desgravación para el público consumidor, del resto del país, ya que las nuevas tasas impositivas unificadas son inferiores a las que resultarían sobre la misma unidad impositiva de la suma de la tasa nacional y provincial actualmente existente. A pesar de esta desgravación, la Nación debe entregar a las provincias una cantidad fija de recursos, 72.000.000 para el primer año, y corre el albur de la percepción variable de esos tributos. ¿Quién puede ser, entonces, el más interesado en la mejor percepción y mayor contralor de estos impuestos, sino la Nación misma que lleva la parte aleatoria en el producido de la unificación?

Ya hemos dado en el curso del debate las cifras de lo que representan para las provincias las cantidades fijas que debe entregarle la Nación. Para muchas de ellas esas cantidades son tan importantes que representan casi el 80 % de sus recursos, de modo que hasta podrían prescindir de sus ministros de Hacienda, porque éstos no tendrán mayor tarea que desempeñar. Realmente será muy cómoda la situación de un ministro de Hacienda de provincia cuando pueden de antemano saber que el 80 ó 90 % de los recursos necesarios para el presupuesto provincial no puede fallar ni en un centavo porque la Nación debe entregar una

cantidad fija constante y progresiva cada año.

Por otra parte, no puede haber conformidad o disconformidad con las liquidaciones del Banco de la Nación porque la ley establece reglas fijas y precisas de cómo el Banco debe hacer esa distribución del impuesto a las provincias. Debe dividir la cantidad que corresponda a cada una de ellas, por el número de días del año, e ir acreditándoles esa cantidad día a día. De manera que no se explica qué razón podría haber para establecer un recurso en contra de esta distribución que debe ser sistemática y automática.

Y cuando se cambia el régimen, a los cinco años, se establecerá, ya en una forma definitiva, el por ciento para la Nación y las provincias, que según un cálculo un tanto somero será, como expliqué, a juzgar por las percepciones actuales, alrededor de un 67 % para la Nación y un 33 % para las provincias.

Por otra parte, temo que las funciones de este consejo federal, que no están claramente especificadas en el proyecto presentado, perturben, en vez de simplificar, el rodaje administrativo.

Sólo tendría un aspecto simpático a las provincias, el relativo a que la designación de los empleados fuera hecha a propuesta de ellas. Pero no podemos olvidar, señor presidente, que por una disposición constitucional es una facultad privativa del Poder Ejecutivo el nombramiento y remoción de los empleados nacionales. En esto nos hemos apartado un tanto del precedente americano.

Otro aspecto que tampoco me satisface es el de los recursos judiciales que se crean ante la Cámara Federal. Ya hemos creado otros recursos especiales ante la Corte Suprema de Justicia, recursos que ha recordado con justicia el señor diputado por Mendoza, y nos parece que sería complicar y en cierto modo crear un régimen contradictorio si se aprobaran estos otros. Siendo en todos estos asuntos parte alguna provincia, corresponde, de acuerdo a los

preceptos constitucionales la jurisdicción originaria a la Corte Suprema de Justicia. Por las razones que ligeramente esbozo en esta improvisación, me veo en el pesar de no poder aceptar la sugestión formulada por el señor diputado por Mendoza, proposición que valoro como una contribución sincera del señor diputado al régimen federal al que por vocación y tradición se halla tan vinculado.

Nada más.

**Sr. Pena.** — Pido la palabra.

En la sesión de ayer, a propósito de un artículo del despacho de la comisión discutido en la Cámara, pasamos a cuarto intermedio para considerar una proposición en la que pudieran conciliarse los propósitos encontrados de los autores de distintas iniciativas. Terminada ya prácticamente la sanción de la ley de unificación de impuestos, porque existe consenso unánime de que conviene eliminar del despacho los puntos que no se refieren propiamente a la unificación, el señor diputado por Mendoza sugiere la creación de un tribunal de impuestos internos, para las reglas de aplicación.

No entro a considerar la iniciativa del señor diputado, pero como observo que algunos de los fundamentos que ha dado acaban de ser rebatidos o contradichos por el señor diputado Martínez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, creo sería más práctico que la Cámara terminara de inmediato la consideración de la ley de impuestos internos en el punto a que se ha llegado, y que el proyecto del señor diputado, sobre tribunal especial de reglas de aplicación, que es un articulado completamente aparte, pase a la comisión y tenga un despacho que contemple las razones expuestas por el señor diputado y también los reparos que se le han hecho, dándose la posibilidad de una sanción que consulte todos los pareceres sobre la materia.

Por lo tanto, hago indicación — que espero acepte el señor diputado por Mendoza — de que su iniciativa pase como proyecto a comisión, donde será

despachado con la celeridad que su naturaleza requiere.

**Sr. Corominas Segura.** — No tengo inconveniente en aceptar. Para no demorar todo lo demás; constituiría un proyecto aparte que pasa a la comisión respectiva.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Así se hará.

El artículo 29 del proyecto de ley sobre unificación, es de forma.

Queda sancionado.

**Sr. Martínez.** — Que se comuniquen de inmediato al Honorable Senado.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — Así se hará.

## 6

### ORDEN DE LA LABOR

**Sr. Dickmann (A.).** — Ahora correspondería votar la indicación que formulé.

**Sr. Presidente (Ferreira).** — ¿Quiere concretar su moción el señor diputado?

**Sr. Dickmann (A.).** — Que pasemos ahora a tratar el proyecto sobre la Junta Reguladora de Vinos, en lugar de seguir con la distribución del impuesto a los réditos y a las ventas, impuesto este último que aún no ha sido votado por la Cámara.

**Sr. Arce.** — Me parece mejor que tratáramos en seguida lo que se refiere a la prórroga y distribución del impuesto a los réditos, sin mencionar para nada el de las ventas. Terminado ese asunto, se podría entrar a tratar el proyecto sobre la junta reguladora o el impuesto a las ventas.

**Sr. Dickmann (A.).** — Yo estaría conforme con lo que propone el señor diputado Arce en forma transaccional, pero le hago notar que tiene el inconveniente de que esa ley no estaría terminada, pues está supeditada al pronunciamiento de la Cámara sobre el impuesto a las ventas, ya que para an-